

Contenido

¿Qué es ser de izquierda?

Nicolás Lynch

Lima, 2005



¿Qué es ser de izquierda?

Nicolás Lynch

¿Qué es ser de izquierda?

© Nicolás Lynch Gamero

© Sonimágenes del Perú SCRL.

Primera edición: Lima, octubre de 2005

ISBN: 9972-2681-0-1

Hecho el Depósito Legal: 2005-7257

Tiraje: 1,500 ejemplares

Diseño e impresión: Sonimágenes del Perú SCRL.

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente

Contenido

Prólogo	9
¿Qué es ser de izquierda?	13
Izquierda autoritaria e izquierda democrática	35
La refundación republicana del Perú	45
Por un Partido Socialista para cambiar democráticamente al Perú	53
Resignificar el socialismo en el Perú	75

Prólogo

Este libro recopila un conjunto de artículos escritos en diferentes ocasiones y para distintos públicos pero con un único tema: la renovación democrática del pensamiento de izquierda. Esta es una batalla en dos frentes: por un lado, con la derecha neoliberal, que apuesta por la dictadura abierta o la democracia precaria; por el otro, con la izquierda autoritaria, cuyo antiguo propósito de dictadura revolucionaria se desvanece frente a los nuevos tiempos y recalca cada vez más en el clientelismo desembozado para mantener sus nichos de influencia social. En ambos casos se trata de posturas regresivas que sacrifican el progreso de los pueblos y el desarrollo del país a sus intereses corporativos de casta y/o clase, defensoras conscientes o inconscientes del estado de cosas imperante.

Cada vez es más claro que frente a la crisis del neoliberalismo y a la casi desaparición de la izquierda tradicional, la alternativa del siglo que empieza es la que anuncia una democracia diferente, participativa y representativa, en la que los ciudadanos harán oír su voz cotidianamente sin tener que soportar a los representantes que se olvidan de ellos una vez que son elegidos. Los tiempos han

cambiado, qué duda cabe; los sujetos de la transformación social ya no son los mismos que en el siglo anterior, y los problemas se presentan muchas veces de forma drásticamente distinta. Sin embargo, las banderas primigenias con las que nace el pensamiento de izquierda de la mano con la modernidad –igualdad, justicia, libertad y solidaridad– hace 200 años, continúan vigentes, porque los problemas de pobreza, desigualdad, explotación, dictadura y opresión imperial continúan acosándonos como flagelos incesantes.

Las cosas, sin embargo, no son fáciles. Han pasado 15 años desde la caída del muro de Berlín y parece que todavía será largo el camino para afirmar la perspectiva renovadora que nace de las cenizas de 1989. La ideología neoliberal ha aprovechado la ocasión de su triunfo sobre las dictaduras comunistas de Europa del Este y la ex Unión Soviética y ha extendido su influencia por todo el planeta. Si bien hoy es un punto de vista afectado por diversas crisis que tienen que ver con la inconsistencia de sus ideas y los reiterados fracasos de su práctica, de lo cual América Latina es testigo de excepción, todavía cuenta con el inmenso prestigio que le da la renovada expansión imperial de Estados Unidos y las expectativas de consumo que despierta en los desheredados del mundo. De allí la necesidad imperiosa de continuar el debate para afirmar la identidad de la izquierda renovada y contribuir a una práctica fecunda.

Los textos que presentamos en esta recopilación están atravesados por un eje central: la distinción entre la izquierda democrática y la autoritaria y los elementos para una nueva visión que constituyan alternativa al denominado capitalismo salvaje. Una alternativa, por supuesto, que signifique riqueza y progreso, muy lejos del estancamiento en el que cayeron los denominados países del llamado "socialismo real". Este esfuerzo por perfilar una determinada identidad tiene por objeto contribuir a la definición de un programa democrático que transforme la sociedad peruana en el contexto de una América Latina que también cambia y gira crecientemente hacia la izquierda. Nuestra vocación es plural. No pretendemos tener la verdad absoluta, sino creemos por el contrario que esta surge en una democracia del contraste de puntos de vista diferentes, proceso en el cual debemos estar listos para reconocer la razón en el otro y llegar a conclusiones que permitan construir una sociedad democrática.

Si algún debate suscitamos, las ideas que presentamos hoy habrán cumplido con su propósito orientador y el trabajo habrá valido la pena. Esperamos que este debate supere la "pequeña historia" de la rencilla ideológica y sea motivo para un intercambio político serio que tanto se extraña, especialmente si es de ideas, en el Perú y en la región latinoamericana.

Los siguientes han aparecido en versiones anteriores en:

- “¿Qué es ser de izquierda?” *Nosotros* (Lima), no. 2 (agosto 2003).
- “Izquierda autoritaria e izquierda democrática”. *La República* (Lima), 12 octubre 2004.
- “La refundación republicana del Perú”. *Nosotros* (Lima), no. 1 (marzo 2003).
- “Un Partido Socialista para cambiar democráticamente al Perú”. Inédito.
- “Resignificar el socialismo en el Perú”. *Socialismo y Participación* (Lima), no. 75 (1996).

¿Qué es ser de izquierda?

A comienzos del siglo XXI, cuando la hegemonía ideológica del neoliberalismo muestra signos de crisis, en algunos casos de debilidad y en otros de omnipotencia, es preciso dejar en claro la puesta al día del pensamiento de izquierda para de esta manera poder informar e influir en las nuevas alternativas políticas que surgen en el Perú y en América Latina. Esta crisis del "pensamiento único", que hasta hace pocos años parecía todopoderoso, nos muestra que estamos muy lejos del llamado fin de las ideologías y que, por el contrario, la organización de los intereses de cada uno de los distintos grupos sociales suele expresarse en un determinado momento de su madurez. Este intento de puesta al día asume, por lo demás, que los antiguos problemas de autoritarismo, desigualdad, exclusión y explotación frente a los cuales surgió el pensamiento y la acción izquierdistas hace 200 años persisten, pero que las antiguas banderas de lucha por la libertad y la justicia social deben enriquecerse con nuevos enfoques para mejorar nuestra perspectiva y acercar la realización de estos ideales históricos.

Los antecedentes en el mundo

Desde la revolución francesa en adelante la izquierda ha sido considerada la posición política de quienes propician un cambio con el objetivo de conseguir justicia social y democracia. La lucha por este cambio estuvo primero asociada con las revoluciones burguesas europeas que buscaban el establecimiento de regímenes democrático representativos en contra del absolutismo imperante que defendía intereses aristocráticos. Posteriormente, en particular desde principios del siglo xx, el desarrollo de la clase obrera en los países avanzados llevó a privilegiar en la definición de izquierda la lucha clasista por la justicia social, lo que también influyó en la definición de la lucha democrática y llevó a concebir esta última como la lucha por una “democracia social” que resumía y sintetizaba la perspectiva izquierdista. Con la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo, la izquierda abandona los estrechos marcos del clasismo novecentista y asume nuevamente la identidad de los ciudadanos del mundo que bregan contra la globalización excluyente y a favor del imperio pleno de los derechos humanos, en sus sucesivas generaciones, para que se implanten en el planeta democracias que reconozcan y respeten las diferencias y repartan equitativamente los frutos del trabajo y el desarrollo.

La democracia social, como una vertiente política de la Edad Moderna, se basa en un nuevo

sentido de la libertad. Esta, para la izquierda, no es solamente libertad negativa, o el establecimiento de limitaciones al poder político, como habían señalado los liberales, sino, más que eso, el esfuerzo porque la colectividad garantice el bienestar de los individuos por su sola condición de seres humanos. El objetivo de la izquierda es entonces establecer garantías sociales, jurídicas e institucionales para que todos gocen del bienestar material, por lo que apunta a combatir, como problema central, la desigualdad entre las personas. Al respecto, la izquierda desde sus inicios ha sido muy clara: la fuente principal de desigualdad es la desigual distribución de recursos económicos en cada sociedad específica. Esta aberración, que permite el bienestar de unos pocos y el malestar de la mayoría, es la injusticia fundamental cuya reparación es el eje de la acción izquierdista.

La lucha contra la desigualdad, sin embargo, debe llevarse adelante por la vía del trabajo, del desarrollo de una "moral de productores" como decía José Carlos Mariátegui, porque ese es el sentido moderno que nos puede encaminar a una articulación positiva con el proceso globalizador y finalmente al desarrollo del país. Esta precisión tiene una importancia crucial porque frente a la grave injusticia que significa la desigualdad surgen también, sobre todo en países atrasados como el Perú, posiciones arcaicas que se rebelan contra la misma desde una nostalgia por el pasado. Este último tipo de rebelión, que ha caracterizado a la

mayor parte de la izquierda en el Perú, tiene graves consecuencias regresivas y es un aliado, quizás inconsciente, del capitalismo salvaje que buscan imponernos cotidianamente.

La pugna por la democracia social sufrió, sin embargo, una escisión. Esta se dio entre quienes postulaban este objetivo por un camino reformista y generalmente pacífico, a través de la transformación democrática, primero de absolutismos y dictaduras, y luego de la denominada democracia representativa, y quienes, también combatiendo las dictaduras, negaban el papel progresivo de cualquier democracia que no fuera la suya y postulaban la necesidad de asaltar y destruir el Estado que daba sustento incluso a formas democráticas de representación política, optando por un camino revolucionario y generalmente violento. Los primeros son los llamados socialistas democráticos o socialdemócratas y diseñan como objetivo político de su movimiento la instauración de un Estado Social o Estado de Bienestar. Los segundos son los comunistas que tienen como objetivo político, al menos en el papel, la instauración de una "dictadura revolucionaria" o dictadura del proletariado como paso previo a la realización de su utopía de abolición de las clases sociales y extinción del Estado. Esta escisión se expresa en el cisma ocurrido en el movimiento socialista europeo durante la Primera Guerra Mundial y se asienta con el triunfo bolchevique en la Revolución de Octubre, que le da un enorme prestigio en la época al cami-

no violento y revolucionario. El cisma se proyecta hasta finales del siglo xx con la división y pugna posterior entre socialdemócratas y comunistas, lo que motivó de profundos distanciamientos y graves derrotas de los movimientos de trabajadores y de las fuerzas progresistas en general. Esta escisión tuvo algún sentido hasta la caída del muro de Berlín y el fracaso de la vía revolucionaria y los regímenes resultantes para alcanzar los objetivos históricos de justicia social y democracia.

La caída del muro de Berlín tiene especial significación para la izquierda en el planeta. Por una parte, cancela la manera autoritaria de entender la lucha por la justicia social y la libertad; es decir, la utopía comunista totalitaria de asalto al poder y de gobierno de partido único. Pero, por otra, muestra las limitaciones de los socialistas democráticos que hasta ese momento habían centrado lo fundamental de su proyecto en el desarrollo del aparato burocrático del Estado y dejado de lado las potencialidades de la sociedad organizada y del propio mercado. Este hecho permite entonces el zanjamiento no sólo teórico y/o coyuntural, sino también histórico, con la última utopía totalitaria del siglo xx y, a la par, da pie, en diálogo con los socialistas democráticos, a un nuevo punto de partida que renueve profundamente el socialismo y lo coloque como el horizonte del siglo que empieza.

Hoy el significado de izquierda vuelve entonces a sus fuentes originales porque los objetivos por

los que siempre luchó, a pesar de los sustanciales avances alcanzados en distintas partes, distan todavía de haber sido plenamente logrados. Fracasada la vía revolucionaria y sus métodos violentos para alcanzar y mantenerse en el poder, queda el camino reformista y pacífico que se ha demostrado en el siglo xx como el más eficaz para el logro y la permanencia de las conquistas sociales y democráticas. Este, sin embargo, no debe identificarse exclusivamente con la construcción del Estado de Bienestar, sino también con el desarrollo de diversas iniciativas de control y participación social en las esferas económica y política. Ello es especialmente importante en América Latina donde es difícil señalar que haya existido un Estado de Bienestar, como tal, sino más bien iniciativas de reforma social, desde los movimientos populares y el propio Estado, que no han logrado estabilizarse en el tiempo pero que han ampliado el espacio de los derechos y la ciudadanía.

Quizás uno de los ámbitos en los que cambia en forma sustantiva la posición históricamente enarbolada por la izquierda es aquel de la economía y de los derechos de propiedad. El fracaso de la vía revolucionaria y de los regímenes consecuencia de la misma, así como el desarrollo de la revolución científico-tecnológica y de la era del conocimiento, llevan a reevaluar, sin que esto signifique eliminar, el papel del Estado en la economía y la eficacia de la planificación central para el impulso al desarrollo. El control de la producción de conocimientos

pasa a ser en esta perspectiva un factor clave en la distribución de la riqueza y en el origen de la desigualdad. Pasan a tener más valor los recursos intangibles resultado de la investigación científica y humanística que los activos materiales que antes se consideraban fundamentales.

Se recupera entonces, dentro de la perspectiva reformista, la economía de mercado como asignadora de recursos y se señala la necesidad de regularla en una perspectiva de planificación concertada de manera que sirva a todos y no sólo a los grandes propietarios. De igual manera, se revalúa la existencia de la propiedad privada como la fuente de la desigual distribución de recursos en la sociedad, tal como sucede en Europa occidental luego de la Segunda Guerra Mundial, señalando que vía su regulación por el control ciudadano y una autoridad pública eficiente, en un período donde la tecnología vuelve muchas veces los recursos intangibles, se pueden conseguir mejores resultados que a través de los antiguos métodos de la confiscación y/o expropiación.

Otro aspecto que ha sido ampliado en su perspectiva en las últimas décadas es el relativo a la desigualdad social. Ya no ocurre como durante el primer siglo de acción izquierdista, cuando se consideraba, casi de manera excluyente, a la desigual distribución de recursos económicos como la única fuente de desigualdad. Hoy se agregan a esta otras desigualdades, como aquellas que provienen

de la discriminación por razones de género, edad, origen étnico o procedencia regional. Es más, muchas veces, en determinados ámbitos, la desigualdad principal o no es la económica, o se encarna en alguna otra, como, por ejemplo, en la discriminación étnica, tal como ya señalara para el Perú de su época José Carlos Mariátegui.

A pesar de, y quizá por, todos estos cambios y ampliaciones, podemos decir que la izquierda en el mundo es, en esencia, una posición política que pugna por la participación, lo más directa posible, de los individuos, mujeres y hombres, en la gestión de los asuntos que les competen. El antiguo ideal de la democracia social se realiza entonces a través de la extensión de la democracia a las diversas esferas de la vida como el criterio fundamental para el logro de la justicia y la igualdad.

¿Qué ha significado ser de izquierda en América Latina y en el Perú?

En América Latina la izquierda ha sido, desde su impronta inicial en las primeras décadas del siglo xx, la lucha contra el orden oligárquico primero y protoburgués después, el cual se compromete sucesivamente con la dominación externa de nuestros países y con diversos grados de limitación a las libertades públicas, que van desde la dictadura abierta hasta la democracia tutelada por los militares y por los grandes intereses económicos.

A diferencia de Europa occidental, la distinción entre una izquierda reformista y otra revolucionaria no ha sido tan nítida en nuestra historia ni ha estado directamente asociada a que se asumiera o no una perspectiva clasista. Las posiciones reformistas y/o revolucionarias han estado más en relación con el carácter dictatorial o democrático del régimen político que enfrentaban que con el discurso ideológico y su traducción práctica. Así, hemos tenido en América Latina populistas revolucionarios y marxistas reformistas. Incluso, no debemos olvidar que las cuatro revoluciones sociales triunfantes en el siglo xx latinoamericano —México, Bolivia, Cuba y Nicaragua— fueron hechas por movimientos nacional-populares, más allá de la evolución marxista que posteriormente pudieron tener algunos de ellos, como fue el caso del Movimiento 26 de Julio en Cuba. Igualmente, la mayoría de los partidos comunistas en América Latina en la segunda mitad del siglo xx fueron también reformistas. De la misma manera, populistas y marxistas se han influido mutuamente en la historia de nuestra América, distanciando y fusionando sus perspectivas de acuerdo a la historia de cada país, pero casi siempre defendiendo la justicia redistributiva y la independencia nacional de la dominación externa, en nuestro caso principalmente de Estados Unidos.

El punto de ruptura entre las diversas izquierdas en América Latina estuvo dado, de manera similar que en otras latitudes, por el camino tomado

para alcanzar la emancipación social, la democracia y la justicia. Mientras unos, inspirados sobre todo por el camino de las revoluciones triunfantes y en especial por el triunfo de la revolución cubana, apostaban a la vía armada, otros, en su mayoría partidos nacionalpopulares, han preferido la democratización progresiva de la sociedad y el Estado. El dilema, asimismo, atravesó experiencias como la del gobierno de Unidad Popular en Chile, que frustró en buena medida esa experiencia, y la de Izquierda Unida en el Perú, que llevó al colapso a dicho frente político. Esta disyuntiva, sin embargo, tampoco encuentra asidero hoy en la región después del agotamiento de la experiencia cubana, de la transacción en que terminaron las guerrillas centroamericanas y de la derrota del terrorismo senderista en el Perú, todo esto dado en el contexto de fracaso de la utopía comunista y del colapso de la Unión Soviética. Pero, la razón más importante quizá sea la ola democratizadora que abarca la mayoría de los países latinoamericanos, a pesar de algunos retrocesos puntuales, como el que sufrió el Perú en la década de 1990. Esta ola resalta los beneficios del camino electoral y pacífico, de las soluciones de consenso y del respeto al Estado de derecho como una vía más segura para lograr cambios sustantivos que duren en el tiempo. La propia experiencia de duro fracaso y el contexto democrático de la región van a ser entonces vitales para que una izquierda violenta y arbitraria quede atrás y otra democrática y acorde

con su tiempo asuma las banderas de la justicia y la transformación social.

Esta apuesta por la democratización progresiva de la sociedad y el Estado no quiere decir, sin embargo, que las fuerzas de izquierda no tengan que enfrentarse en múltiples oportunidades a malas decisiones y/o a malas autoridades en los diversos niveles de gobierno. Este enfrentamiento, más bien, no debe agotarse en peleas estériles sino servir para abrir las puertas que exige el proceso de democratización. El respeto a las reglas democráticas y al Estado de derecho no quiere decir tampoco que nos quedemos conformes con los estrechos marcos de esta democracia y de este derecho definitivamente limitados. Asumimos por ello, como parte de nuestra identidad, la lucha por profundizar la democracia vía la participación de la población y transformar el Estado de derecho para hacerlo definitivamente inclusivo en la forma de un Estado Social y Democrático de Derecho que nos albergue, proteja y brinde los recursos institucionales y de poder necesarios a todos los ciudadanos.

Ser de izquierda, entonces, en América Latina y en el Perú es ser demócratas que luchamos por la justicia social y buscamos reducir las profundas desigualdades que padecen la región y el país. Ello significa también encontrar “un lugar bajo el sol” en la globalización mundial que permita una integración beneficiosa para nuestros pueblos, que propicie y no postergue nuestro desarrollo, y

que se base en la inclusión de todos en los beneficios de la globalización y no en la exclusión de la mayoría para solventar los gastos de unos pocos. Esta perspectiva tiene especial actualidad ahora que resurge la garra imperial en Estados Unidos, que prioriza claramente la necesidad de un nuevo reparto del mundo posterior a la Guerra Fría que subordine e incluso ponga de lado los derechos democráticos.

Ser de izquierda, sin embargo, no significa más, luego de la caída del muro de Berlín, ser “un rebelde sin causa” que se opone por oponerse sin presentar alternativas viables de desarrollo a los problemas existentes. Esto es especialmente cierto en lo que toca al desarrollo capitalista de los países atrasados. La actitud ciegamente anticapitalista es más una actitud anárquica que una actitud de izquierda. Además, el anticapitalismo carente de alternativas que no sean alguna afirmación retórica termina a la postre jugando un papel reaccionario que impide el progreso y el bienestar de las mayorías. Los izquierdistas democráticos nos oponemos a un tipo de desarrollo capitalista, aquel designado como el modelo neoliberal, pero no al capitalismo como tal, con la adecuada regulación y planificación indicativa de la autoridad pública correspondiente. Es más, en los países de escaso desarrollo relativo, el desarrollo y la ampliación de los mercados cumple un papel infinitamente progresista porque nutre a los actores y a las fuerzas productivas que deben construir la sociedad democrática y moderna.

Lo que sucede es que en países como el Perú el desarrollo capitalista no se ha emancipado todavía de su origen oligárquico y feudal, que liga el poder del dinero con el ejercicio directo del poder político. Esta relación configura lo que algunos hemos llamado un "capitalismo de amigos", que obtiene una buena porción de su ganancia de su relación privilegiada con el poder político más que de la competitividad de sus propias empresas. Esta situación, además de brindarle un panorama sombrío al propio desarrollo del capitalismo, reconcentra el poder y la riqueza en muy pocas manos, polariza aún más la difícil situación existente y excluye a la mayoría del excedente que se genere. A este capitalismo de amigos, que se organiza como un orden abusivo, ciertamente debemos oponerlos porque impide que avancemos hacia nuestro objetivo de constituir una sociedad democrática.

Esta definición incluye explícitamente a los que vienen tanto de vertientes nacional-populares como cristianas y marxistas, pero que, recogiendo de su tradición, buscan luchar por la justicia y la igualdad en las condiciones de creciente democratización y vigencia del Estado de derecho que imperan en nuestra América.

Práctica y perspectiva en nuestra tradición izquierdista

La izquierda en el Perú ha tenido una propuesta de cambio revolucionaria, nacionalista y democrá-

tica que priorizaba la justicia redistributiva y consideraba indispensable para realizarla una transformación global de la economía, la política y la sociedad en el país, poniendo énfasis en el afianzamiento de la soberanía nacional y en la conquista de derechos sociales como la forma de acceso a la ciudadanía y a la consideración de todos los individuos como iguales entre sí. La revolución, sin embargo, como estrategia de asalto al poder, se restringió a episodios, importantes pero limitados en su impacto: las insurrecciones apristas de 1932 y 1948 y las guerrillas de 1965. La revolución como utopía tuvo, asimismo, un epílogo trágico en la acción arbitraria y terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA en la década de 1980.

Es preciso remarcar que la diferencia entre los incidentes revolucionarios del APRA en su primera etapa y de las guerrillas marxistas de la década de 1960, con Sendero Luminoso y el MRTA en la década de 1980, radica en que mientras los primeros se insurrectaron dentro del estrecho marco de una sociedad oligárquica y como consecuencia del desarrollo de importantes movimientos sociales, los segundos, en cambio, propiciaron un levantamiento al margen y muchas veces en contra de los movimientos sociales y la abrumadora mayoría de los partidos de izquierda que habían decidido participar en la democracia que inauguró la Constitución de 1979. Esta circunstancia indica el carácter arbitrario e injustificado de su rebelión, que se oponía directamente a la voluntad popular,

tanto la expresada en las urnas como en la movilización de la población.

Es más, es importante señalar también que la lucha armada de la década de 1980, especialmente la que ejerció Sendero Luminoso, se nutrió de concepciones violentistas de carácter premarxista. Al absolutizar la violencia como fuente de desarrollo revolucionario, confundieron la antigua sentencia de Federico Engels –“la violencia es la partera de la historia”– con otra que podríamos frasear como “la violencia es la madre de la historia”. Más allá del debate de la concepción marxista misma, una cosa es partera y otra madre. En un caso se facilita una acción, en el otro se la origina. En este mismo sentido reza también otro eslogan de la época, de origen maoísta –“el poder nace del fusil”– que confunde el instrumento del ejercicio violento con los sujetos que buscan el poder a través de la violencia. Los instrumentos son también distintos de los sujetos y confundir los unos con los otros es tomar a la violencia como un fin en sí mismo. Esta opción distorsionada y marginal al propio pensamiento revolucionario es lo que llevó a las prácticas terroristas que todos conocimos y sufrimos en el Perú de la época.

Pero la revolución informó la actividad política de los partidos populares, el APRA y los partidos marxistas, durante varias décadas. En el primer caso, entre 1930 y 1956; en el segundo, hasta finales de la década de 1980. Es importante resaltar

el mayor éxito del APRA como partido revolucionario, entre 1930 y 1956, quizá debido a su orientación pluriclasista, lo que, junto con el liderazgo de Víctor Raúl Haya de la Torre, le permitió un desarrollo mayor dentro de la sociedad peruana que a la izquierda marxista-leninista, de estricta referencia ortodoxa. Esto significó el desarrollo de importantes aparatos partidarios que llevaron adelante una significativa acción, tanto clandestina como abierta, en lucha contra distintas dictaduras oligárquicas y militares. Empero, significó también el desarrollo de una cultura política de confrontación, que entendía la política como una relación amigo/enemigo, en la que el eventual adversario debía ser destruido o subordinado luego de ser derrotado, y en la que no cabían el consenso ni el compromiso para conseguir determinados objetivos, sino tan sólo la "acumulación de fuerzas" en función de "la toma del poder". Esta cultura confrontacional no sólo se desarrollaría en el combate a la oligarquía sino que trascendería esas fronteras para convertirse en la norma de conducta de una pugna muchas veces fratricida entre el APRA y la izquierda marxista. Como se ha dicho desde la sociología, este país fragmentado desarrolló también subculturas políticas antioligárquicas que no supieron juntar fuerzas para enfrentar a un enemigo, durante décadas común, y que permitieron la sobrevivencia del Perú señorial hasta nuestros días.

Un elemento gravemente ausente, tanto del discurso como de la práctica de estas izquierdas, fue

el de la lucha contra la discriminación étnica que afecta a la abrumadora mayoría de los peruanos. A diferencia de José Carlos Mariátegui, que estableció una articulación, válida para su época, entre clase y raza, la izquierda posterior reivindicó a las mayorías originarias en las consecuencias de su acción al lograr mayores derechos ciudadanos y en este sentido afirmar políticamente el mestizaje, pero no en el discurso ni en su acción explícita, que continuaron siendo clasistas y por ello eurocéntricos. La postergación de las reivindicaciones étnicas ha afectado la lucha por la diversidad en el país y, sobre todo, ha contribuido a perennizar el carácter elitista y criollo del poder político, en el que todavía predominan, a pesar incluso de las formas democráticas, los ritos virreinales y oligárquicos. Al respecto, es una vergüenza la falta de afirmación del Estado laico, legislado en nuestras constituciones, pero incapaz de ser puesto en la práctica por los actores políticos que se reclaman democráticos, incluidas las izquierdas en sus diversos matices.

La revolución, por otra parte, tuvo importantes consecuencias reformistas. Tanto los breves episodios revolucionarios señalados, como la acción cotidiana de los partidos de izquierda, llevaron a sucesivas oleadas democratizadoras que abrieron espacios en el Estado para las clases populares, permitieron el reconocimiento de derechos, especialmente sociales, y redistribuyeron, aunque mínimamente, la riqueza de los grandes propietarios.

Pero quizá lo más importante haya sido la movilización independiente de cientos de miles de peruanos que por primera vez participaban en política y la organización consecuente con creciente autonomía del Estado que llevaría a formar las primeras redes sociales que pueden considerarse como sociedad civil. Este fue el caso de la acción revolucionaria aprista que devino en la impronta reformista de 1956 en adelante y que, junto con las guerrillas de 1965 serían el antecedente de las reformas del gobierno militar en la década de 1970.

Empero, la estrategia revolucionaria no sólo produciría reformas sociales, movilización y organización, sino también caudillismo y clientelismo. El caudillismo es la forma típica de liderazgo de la movilización que se desarrolla en la época, característica de los partidos populistas pero también influyente en la izquierda marxista-leninista. Se trata de un liderazgo personalista que apela directamente a las masas para movilizarlas tras de sí, desarrollando una relación contradictoria con ellas que a ratos les permite organizarse y a ratos las subordina a sus intereses inmediatos, aunque en todo momento impide que institucionalicen su expresión de manera representativa. El caudillismo genera en un primer momento creyentes en las cualidades sobrenaturales del líder, pero esta relación se desvanece conforme pasa el tiempo y no aparece la "tierra prometida", lo que da paso al establecimiento de redes de clientelismo político que intercambian lealtades por prebendas, co-

rrompiendo definitivamente el afán transformador tanto de populistas como de marxistas.

Al clientelismo se agrega también otra forma de relación política entre vanguardias y masas, típica en especial de la izquierda marxista: la llamada "representación corporativa". Esta izquierda se asume representante de tal clase o sector social por el hecho de que un grupo de sus militantes controla determinado gremio o central sindical. Estas formas de representación corporativa alcanzan su punto más alto en la década de 1970, pero intentan prolongarse, por parte de los sectores más radicales de la izquierda legal, en la década de 1980, desarrollando las denominadas "asambleas populares", que, en el afán de profundizar la democracia, hacen una competencia desleal a la institucionalidad representativa entonces en funciones.

El cambio de época, que se desarrolla en un clima agudamente reaccionario, entre las décadas de 1980 y 1990, lleva a que se resalten las características negativas de la estrategia revolucionaria y se identifique con ellas a todo el proyecto izquierdista. A esto contribuye la coincidencia para el Perú de dos hechos claves: la caída del muro de Berlín y el fracaso de la izquierda, lo que desprestigió la idea de cambio social en todas sus versiones. Este fracaso tiene tres expresiones: la ruptura y desaparición de Izquierda Unida, la coalición izquierdista más importante de nuestra historia y en ese momento de

toda América Latina; el fracaso del gobierno aprista encabezado por Alan García, y, por último, quizá lo más importante, la aparición y derrota de Sendero Luminoso, el "bebé de Rosemary" de la izquierda peruana, que, enarbolando un proyecto totalitario, hace del terror armado su forma principal de lucha. Esto lleva, en la década de 1990, al aislamiento y la casi disolución de toda forma de organización política izquierdista. Es más, se llega a la identificación, en el sentido común popular, de toda forma de acción política con una posición de izquierda, desterrando, por lo tanto, cualquier proclividad a la lucha por reformas sociales y tomando a las mismas como una vuelta al pasado de crisis y desorden.

El proyecto revolucionario, que condujo a la mayor parte de la izquierda la mayor parte de su historia, fue indudablemente un proyecto autoritario y elitista, alejado de las posibilidades de participación ciudadana. Esto hizo que fuera un inquilino incómodo para la democracia y que no pudiera sobrevivir la crisis de finales de la década de 1980, cuando millones de ciudadanos reclamaron un nuevo liderazgo político que tampoco pudieron encontrar en una izquierda que se parecía más a los partidos tradicionales que a fuerzas políticas de innovación y cambio.

Sin embargo, las consecuencias reformistas de la estrategia revolucionaria han dejado honda huella en el pueblo peruano. La izquierda todavía se identifica con la organización social indepen-

diente y con la lucha por los derechos sociales, la justicia distributiva y la participación democrática. Desde estas cenizas será preciso volver a partir para afirmar un proyecto de cambio social en democracia, por la vía de la movilización ciudadana, que respete nuestra diversidad étnica y regional y que lleve al consenso y las reformas. Todo depende de que asumamos verdaderamente las causas del fracaso y no repitamos los errores del caudillismo, el clientelismo y el corporativismo. De esta manera podremos concebir la nueva organización izquierdista como una comunidad democrática de ciudadanos que tenga como objetivo la refundación democrática del Perú, ampliando paso a paso, pero de manera radical, la democracia liberal representativa.

Esta refundación democrática del Perú no se plasmará en un evento súbdito ni será tampoco la invención de algunos líderes políticos. La refundación democrática será, por el contrario, un proceso participativo que deberá partir de la sociedad civil y de los poderes locales y regionales para realizarse plenamente en el poder central, organizándolo y descentralizándolo. Así, la refundación democrática encontrará su vitalidad en una fuerza que viene de abajo, transformando en este proceso el conjunto del Estado. Esta refundación democrática, sin embargo, no tendrá sentido si no funda una nueva economía, que desarrolle un mercado inclusivo que propicie la inversión y el trabajo, garantizando tanto los derechos de propiedad del ca-

pital como los derechos sociales de los trabajadores, pero, sobre todo, terminando en el plazo más corto posible con la pobreza en que se encuentra sumida la mayoría de los peruanos. Una refundación, asimismo, que afirme nuestro carácter de país pluricultural y multilingüe, que propicie y no ahogue la diversidad. Sólo de esta manera el desarrollo de mercado podrá convertirse en una base sólida para el desarrollo de la democracia.

Recogiendo de nuestras tradiciones y aprendiendo de nuestros errores es que los izquierdistas, sean nuestros orígenes marxista, cristiano, socialista, humanista o populista, podremos postular la necesidad de un nuevo Perú, donde no existan privilegios en la economía, la sociedad o la política que no provengan de la necesidad básica, el mérito propio o la voluntad popular.

Izquierda autoritaria e izquierda democrática

Alguna vez un periodista me preguntaba sobre el futuro de la izquierda en el Perú y yo le respondía que la izquierda no existe que lo que existe es una izquierda autoritaria y otra democrática. Igual sucede con la derecha no existe una única derecha: sino la que respeta las reglas democráticas y la que promueve la dictadura.

Por eso carece de sentido hablar de unidad de izquierda. No puede haber unidad entre los que luchan por una dictadura, cualquiera que sea el apellido que esta tenga, y los que luchamos por la democracia y el desarrollo del Estado de derecho. Es más, la diferencia reside en la naturaleza íntima de la política: su contenido ético. Para los primeros, el fin justifica los medios; para los segundos, existe una relación entre medios y fines que le da sentido ético a la acción política. Por eso, la izquierda autoritaria, al igual que la derecha del mismo signo, no se esfuerzan por distanciarse, de la lucha armada en el primer caso, ni del golpe de Estado en el segundo, queriendo pasar por agua tibia en el debate democrático sus discursos violentistas.

El mito, sin embargo, que existe en torno a la unidad de izquierda como fuente de una supuesta fuerza de las mayorías populares tiene su origen en la larga hegemonía que ha tenido el marxismo-leninismo en la izquierda peruana, siempre a la búsqueda de compañeros de viaje para avanzar en sus propósitos políticos. Ello se expresó también en la constitución de Izquierda Unida en la década de 1980. La amplitud, fuerza e identidad que alcanzó Izquierda Unida dejó en la memoria de muchos dirigentes populares la idea de que sólo juntando a todos los que se reclamaban izquierdistas se podían lograr las banderas de justicia y libertad. Paradójicamente, la derecha no desarrolla un mito similar. Para ellos se trata de un tema de desarrollo político. Los arcaicos entre sus filas apuestan al golpe; los más evolucionado al Estado de derecho. Sólo en los momentos de crisis extrema podemos decir que cierran filas en torno a sus intereses más inmediatos.

La historia, sin embargo, ha sido pródiga en enseñanzas sobre este mito de la unidad. La destrucción de Izquierda Unida, producto de sus contradicciones internas, fue justamente resultado de la imposibilidad de convivencia en un mismo frente político entre los que vacilaban frente a la acción armada y los que estaban sin dudar por el camino democrático. La polémica entonces ya fue zanjada, por la vida y no sólo por la ideología, 15 años atrás y el interés por la misma para revivir viejos fantasmas no puede ser sino nostálgico o

de utilidad clientelista más que político y/o programático.

Esta polémica se hace imposible además luego de un suceso de impacto planetario como fue la caída del muro de Berlín. Antes de la misma, y a pesar de los *gulags* estalinistas y de las masacres de Pol Pot, todavía se podía explicar el refugio de la radicalidad de izquierda en el discurso y la práctica del marxismo-leninismo por la existencia de un sistema de alcance mundial denominado "socialismo real", que suponía una alternativa al capitalismo y presagiaba la viabilidad de la revolución, señalando que el único camino válido para la misma era el asalto al poder. Pero después de los sucesos berlineses de noviembre de 1989, el mundo cambió para bien. Los ladrillos que cayeron en el centro de Europa enterraron la última gran utopía totalitaria del siglo xx que fue el comunismo. Esto no solucionó las viejas lacras producto de la explotación capitalista y la dominación imperial; sencillamente afirmó que las antiguas luchas de la izquierda, que se remontan al inicio de la Edad Moderna, por la justicia y la libertad, sólo pueden ser continuadas por el camino de la reforma social y democrática, vía la organización y movilización ciudadanas y el sufragio libre y efectivo del pueblo.

El cambio de época que para la izquierda significa la caída del muro de Berlín la lleva, sin embargo, a confrontarse con asuntos cruciales para

su futuro desarrollo. Lo primero es el sentido de su acción política. ¿Se trata nada más de combatir la exclusión por razones que encontramos en un conflicto de clase o de enfrentar, por el contrario, un conflicto mayor que abarca otras contradicciones que no sólo tienen que ver con la economía sino también con la etnia, la cultura, el género, la edad y la procedencia regional? Un conflicto que se despliega, por lo demás, en la pugna civilizatoria entre diversos fundamentalismos que van desde la dictadura unipolar de Estados Unidos hasta los inflamados discursos del terrorismo islámico. En este contexto es que debemos afirmar la lucha por un mundo, una región y un país inclusivos y diversos, buscando, con equidad y justicia, "un lugar bajo el sol" para cada cual. El asumir la política contemporánea como una acción múltiple es algo que está más allá de la comprensión unívoca y conservadora de la izquierda autoritaria; de allí quizá la extraordinaria falta de eficacia en sus empeños.

Por otra parte, está el fenómeno de la globalización, que la izquierda autoritaria toma como una nueva etapa del imperialismo y adopta una actitud de confrontación frente a cualquier efecto de este proceso. La globalización, al igual que el capitalismo, es un fenómeno producto de la evolución histórica de la humanidad y oponerse a ella es como querer parar las manecillas del tiempo. La razón por la que la izquierda arcaica se opone a la globalización es porque esta erosiona el poder

de los caciques locales y sus redes de clientelaje, que permiten la reproducción de los rebeldes sin alternativa. Por el contrario, lo que toca es disputar el liderazgo de este proceso al neoliberalismo, que busca monopolizarlo, identificándolo con el capitalismo salvaje. El asunto es de sumo cuidado porque enfrentar irracionalmente un proceso como la globalización puede llevar, a las fuerzas que lo hagan y al país de ser el caso, a un aislamiento del resto de la humanidad que liquide la viabilidad de quienes tomen esa actitud.

Luego está la dirección en la cual avanzar. ¿Marchamos a la conquista de nuestros ideales por la vía de la reforma o de la revolución? Esta es una pregunta difícil en un país como el Perú, que necesita una profunda transformación social y política. Sin embargo, debemos enfrentar los hechos. Revolución no es sólo una palabra desprestigiada, sino que las revoluciones, allí donde sucedieron, no han traído democracia y bienestar sino dictadura y escasez. La revolución, entonces, no es un método eficaz para conseguir una transformación social y política y traer una sociedad mejor. La reforma, en este sentido, ha tenido una mejor actuación: ha conseguido cambios duraderos en el tiempo que han logrado hegemonía social y política como es el caso de los países de Europa occidental. Debemos entonces avanzar por el camino de la reforma para conseguir poco a poco, y seguro que en varias generaciones, los sueños de la revolución. Ello no significa por supuesto que

renunciemos a la utopía que deberá ser siempre el norte de una sociedad crecientemente justa y democrática.

¿Insistimos en alguna forma de dictadura, proletaria, popular o revolucionaria como el régimen político del cambio social? Indudablemente que a estas alturas nadie que esté en sus cabales puede plantear forma alguna de dictadura. La izquierda democrática, sin embargo, considera que hay necesidad de producir la ampliación y profundización de la democracia liberal representativa que se presenta como la única posible. Creemos que esta, especialmente en países como el Perú, es un régimen excluyente elitista y débil que necesita de una mayor participación ciudadana. Por ello propiciamos una democracia representativa y participativa que brinde los canales para que los ciudadanos puedan tener una presencia cotidiana en el tratamiento de los asuntos públicos. Esta es una posición muy diferente de aquella de la izquierda autoritaria que se camufla en lo que ella misma llama la "democracia burguesa" para no presentar sus planteamientos de "dictadura de clase", que entiende alternativos a los de la democracia liberal y que, usando la "libertades democráticas" de la misma, piensa llevar adelante.

Asumir los planteamientos democráticos supone también tener una concepción plural, de interacción entre varios, de la política. Es decir, entender esta actividad como competencia y eventual

cooperación entre distintos adversarios políticos. Claro que competencia y cooperación no son los únicos procesos en una democracia en formación también se da confrontación entre distintos actores, tanto sociales como políticos. Es más, muchas veces, por el autoritarismo y la corrupción reinantes, los movimientos sociales no tienen otra salida que confrontar. Sin embargo, los mecanismos democrático, deben tender a disminuir la confrontación encontrando los canales adecuados para canalizar los distintos intereses en una democracia. El pluralismo supone también aceptar que un partido democrático no busca sólo el desarrollo de sí mismo, sino de un sistema de partidos, de puntos de vista, ideología y programas distintos, que en su interacción conforman la columna vertebral del régimen democrático. En esta concepción plural la verdad no es anterior al debate democrático sino el resultado del mismo.

Esta concepción plural de la política se opone a la concepción totalitaria, de partido único o partido-Estado, que desarrollaron los llamados socialismo reales. La concepción totalitaria no sólo se expresa una vez establecidas las dictaduras revolucionarias, sino también antes de que esto suceda, asumiendo los partidos marxistas-leninistas que ellos son los portadores de la verdad y que por lo tanto les está permitido usar cualquier medio, legal o ilegal, a su favor. Por ello encontramos con frecuencia que estos partidos buscan sujetar las organizaciones sociales a su dirección, sin in-

teresarles el desarrollo autónomo de la sociedad organizada.

La democracia en esta era de la globalización nos lleva necesariamente a la economía de mercado. Esta forma económica y la libertad en el intercambio de mercancías que ella implica es la única que ha funcionado en la Era Moderna. Es más, la refutación más elaborada del capitalismo, hecha por Karl Marx, señalaba la necesidad del desarrollo capitalista como un hecho histórico y social hasta que agotara sus posibilidades, lo que a la luz de los hechos parece todavía lejos de suceder. Los atajos que distintos procesos revolucionarios quisieron tomar al respecto terminaron en el más rotundo fracaso. Destaca entre ellos la famosa planificación central soviética, que, según la opinión de quienes decían manejarla, nunca fue tal, sino una gran mentira que propiciaba la ineficiencia, el estancamiento y la corrupción generalizadas. Ni qué decir entonces de sus imitadores.

Ahora bien, el reconocimiento de la economía de mercado como la única forma económica que funciona no significa asumir el llamado "capitalismo salvaje" como la única forma posible de mercado. El capitalismo salvaje es el proyecto capitalista de aquellos que lideran la actual globalización mundial y pretenden imponerlo como la única economía de mercado, no porque sea la mejor, sino porque es la que más conviene a sus intereses. Las formas más exitosas de economía de mercado son

las que han tenido tres características: importante intervención estatal, adecuada regulación pública y planificación concertada para su desarrollo de mediano y largo plazo. Nuevamente, Europa occidental es un ejemplo al respecto, pero también Japón y Corea del Sur luego de la Segunda Guerra Mundial. Hoy casi nadie duda de que la economía de mercado adecuadamente regulada es la que permite un desarrollo sostenido. A ello se oponen tanto los neoliberales partidarios del capitalismo salvaje como los estalinistas de todo pelaje que juegan en pared con los primeros para propiciar el conflicto perpetuo que creen es el preludeo de alguna futura revolución.

La claridad del contraste aparece entonces ante nuestros ojos. Por un lado tenemos clasismo, dictadura, visión totalitaria y economía estatal; por el otro, diversidad, participación, pluralismo y mercado, con la regulación necesaria, pero mercado. Establecido el contraste, hay necesidad de que la izquierda renovada acote el campo democrático. Esto significa dejar fuera al autoritarismo y retomar el proceso de transición, que ha sido abandonado por el gobierno de Alejandro Toledo, para lograr de manera definitiva una democracia sobre bases participativas y representativas. Para ello la izquierda debe dejar atrás la imagen de "organizadores de la protesta" que ha tenido a lo largo de los años para consolidar la posibilidad de una izquierda que, junto con otras fuerzas, pueda formar un gobierno de mayoría nacional.

Para que esto sea posible hay necesidad de consolidar una alianza de largo aliento con todos aquellos demócratas que se han jugado sinceramente por empujar la transición y que gustan denominarse "centro político". Esto hará posible aislar las fuerzas conservadoras que no simpatizan con el autoritarismo pero que le temen al establecimiento de una democracia con hegemonía progresista.

El primer paso en este proceso es distinguir entre dictadura y democracia, señalando que el camino de la justicia sólo se encuentra en el terreno democrático.

La refundación republicana del Perú

La tarea de la hora es refundar la República, pero no como el orden excluyente heredado de la Colonia que parece engullirse todo lo bueno que buscamos incluir en él, sino como una República democrática que cumpla con “la promesa de la vida peruana” que suponía darle bienestar a los habitantes de esta tierra. Es cierto que se trata de una tarea con implicancias estructurales y proyecciones quizás utópicas, que por ello pueda motivar desconfianza en algunos lectores, pero creo que plantearnos así el objetivo es la única manera de que entendamos la relevancia del momento presente y podamos salir de los sucesivos encharcamientos en que nos mete la conflictiva cotidianidad de la política nacional.

En esta tarea nos toca una especial responsabilidad a quienes, viniendo de una tradición política de izquierda democrática, hemos asumido como indispensable pero criticado como insuficiente la democracia entendida como el apego a determinadas formalidades. Justamente por nuestra tradición sabemos que la inclusión tanto política, como económica y social, así como el camino de la reforma en áreas claves del poder estatal, son fun-

damentales para que el camino democrático sea viable.

Nos encontramos en un período especial de nuestra política, un período de aquellos que sólo se repiten cada cierto número de años porque suponen una oportunidad para producir cambios de envergadura en el devenir político. Me refiero al período de transición que va de la caída del régimen autoritario en noviembre del año 2000 y que debería culminar con la estabilización de la democracia. Esta transición, sin embargo, está a punto de frustrarse en sus potencialidades de transformación por la incapacidad de los actores sociales y políticos de estar a la altura de las circunstancias.

Digo que es un período muy especial porque sucede al fracaso de varios proyectos políticos en las dos décadas anteriores. Paso a enumerarlos: primero, el fracaso de la democracia de los partidos, entendida como enfrentamiento y arreglo entre notables, en la década larga que va de 1980 a 1992; segundo, el fracaso de la impronta violenta y totalitaria de Sendero Luminoso y el MRTA en la misma década, y el fracaso, por último, de la antipolítica autoritaria de Fujimori y Montesinos, que luego del golpe del 5 de abril de 1992 intentan instaurar un Estado mafioso en el Perú. No son estos los únicos fracasos relevantes en política peruana, pero sí los posteriores a las instauración del sufragio universal, condición *sine qua non* para la plena consi-

deración democrática de los procesos electorales y los gobiernos elegidos. Estos fracasos, ya en un período de universalización, al menos formal, de la ciudadanía, va a ser que cunda la desesperanza frente a la política e incluso frente a la viabilidad del Perú como nación; de allí que valga la pena tenerlos presentes en nuestro recuento. Todo ello resalta la importancia del período que se abre con la caída de la dictadura de los noventa.

Señalo el carácter de oportunidad para producir cambios porque con el formidable consenso ganado con la caída de la dictadura era posible aspirar a terminar con el péndulo histórico entre dictadura y democracia que caracteriza a la política peruana. Las lecciones frescas del terrorismo, la dictadura y el fracaso de la democracia de los partidos anteriores a 1992, esperaríamos hubieran generado un proceso de aprendizaje en los actores sociales y políticos que permitiera evitar los errores del pasado y, lo que es más complicado, construir una democracia estable.

Defino el período como de transición democrática porque, a diferencia de algunos que quieren olvidarse de la transición y de las tareas que ella supone, creemos que este es un proceso vigente y que implica tareas singulares en el Perú en comparación con otros países de América Latina. La transición a la democracia entre nosotros no sólo es el pasaje de un régimen autoritario a otro democrático, vía elecciones, sino, además, la ins-

tauración de un régimen que no ha existido antes, en todo el sentido de la palabra, en este país. Esto supone no precisamente volver a poner en funcionamiento instituciones que hubieran existido antes, como sucedió en las transiciones de los países del Cono Sur, sino crear instituciones, en muchos casos desde cero, como en el caso de la descentralización, para lograr un funcionamiento regular del régimen democrático. Afirmo, además, que el objetivo de toda transición no es sólo elegir democráticamente un gobierno sino lograr una relativa estabilidad que tenga como característica central el que la democracia sea la única forma de hacer política en el país. Llegar a esta situación de estabilidad ciertamente se hace más difícil en un país como el Perú por la carencia de tradiciones democráticas, por lo que la función de los acuerdos y, mejor todavía, de los consensos adquiere gran importancia.

La transición en el Perú es entonces mucho más que el pasaje de un régimen político a otro; la transición es acá un volver a empezar el camino de la construcción democrática en un sentido que trasciende al régimen político y tiene que ver con el espacio público estatal de una manera más amplia. Me refiero a la república democrática como una de las promesas originales de la independencia secularmente incumplida por el orden criollo y que es todavía un objetivo a lograr en nuestro país. Por ello, la transición en el Perú tiene la singularidad de ser reinicio democrático con el sabor

de vuelta al principio que señalábamos y, a la vez, refundación republicana. En ambos casos el prefijo *re* indica que se trata de volver a empezar, pero no como si nada hubiera sucedido, sino tomando en cuenta la experiencia acumulada por tanto la república criolla como por los sucesivos intentos de instaurar un régimen democrático. Ahora bien, la refundación republicana, tal como la estamos planteando, es una tarea de vasto aliento social y político, que incluye la transición democrática, pero nada más que como su primera parte, debiendo apuntar, una vez lograda la estabilidad política y la consolidación institucional, al establecimiento definitivo de una cultura democrática y de un sistema de partidos. Esto último no será tarea de uno sino de varios gobiernos democráticos sucesivos que lleven adelante una tarea sostenida de afirmación de este régimen político.

Esta transición democrática, como primera parte de un proceso de refundación republicana, es lo que está en peligro hoy en el Perú. Cuando el actual gobierno elegido que preside Alejandro Toledo inició su administración, se trazó explícitamente concluir con la transición a la democracia. Ello suponía dos cosas: una alianza política lo bastante amplia para tener la fuerza de implantar la democracia y un programa de reformas que terminara con la influencia de los poderes fácticos que habían sido el apoyo más importante de la dictadura anterior. Todo esto debía tener como objetivo la estabilidad democrática. La alianza

política es lo que Toledo, de manera insuficiente, intenta plasmar en su primer gabinete de "todas las sangres", en el que y el programa de reformas no llega a existir sino en la acción sectorial de algunos de sus ministros. En estas condiciones es que un grupo de personas que habían tenido una experiencia política de izquierda ingresa a colaborar con el gobierno democrático en la esperanza de poder contribuir a culminar la transición. Sin embargo, cuando empiezan las dificultades, por la resistencia de los poderes fácticos a las políticas sectoriales de reforma y el desborde de las postergadas demandas populares, se abren dos caminos: el acuerdo político con fuerzas democráticas aún más amplias o el cierre del gobierno sobre sí mismo y la polarización con fuerzas democráticas rivales. El primero de estos caminos está expresado en el Acuerdo Nacional, el segundo en la sectarización del gobierno. Crecientemente, el gobierno de Toledo opta por la segunda vía, con todas las consecuencias negativas que para el proceso democrático en su conjunto esto significa.

La explicación que podemos encontrarle a esta situación quizás esté en las dificultades para la conversión de la coalición democratizadora que se trajo abajo a Fujimori en una coalición de gobierno que culmine la transición. Es indudable que Alejandro Toledo, por sus propios méritos, se convierte en la mejor expresión de esta coalición democratizadora, pero no la agota ni tampoco llega a expresarla programáticamente con claridad.

Es más, comete el error reiterado de creer que su partido y no su persona como expresión de un gran movimiento antidictatorial es el que gana las elecciones de 2001. La formulación del gabinete de todas las sangres al inicio de su gobierno es un intento de apertura indudable pero que busca más tratar de mostrar una administración plural que expresar la coalición democratizadora a la que hacíamos referencia. Por ello, cuando las personas que representan esta pluralidad van saliendo progresivamente del gobierno, este, paradójicamente, no se siente disminuido sino más bien afirmado en sus propias esencias.

¿Qué hacer frente a esta situación? Ante todo cuidar el proceso democrático de cualquier posibilidad de interrupción o chantaje, tanto en la forma de golpe de Estado, que parece remota en la actualidad, como en la forma de secuestro de la democracia por parte de los poderes fácticos que buscan recuperar o mantener la influencia que tuvieron bajo el fujimorismo. Este último quizá sea el escenario más probable y los conflictos en diversos sectores públicos donde se han intentado reformas con intereses creados de diverso tipo son una buena muestra de ello. Para cuidar la continuidad del proceso democrático es fundamental en lo inmediato luchar por un gobierno de acuerdo nacional que revierta el actual camino sectario y permita retomar un camino de consolidación institucional que desarrolle políticas de reactivación económica y descentralización política y permita la

continuación de reformas sectoriales claves, sobre todo en las áreas sociales y de seguridad. De esta forma, un gobierno de acuerdo nacional permitirá llegar con éxito a la democracia peruana al proceso electoral de 2006.

Sin embargo, la bandera del gobierno de acuerdo nacional es insuficiente en nuestro mediano plazo democrático. Hay necesidad de más. De allí la importancia de formular un programa de gobierno para el año 2006 que tenga como eje y objetivo fundamental la refundación de la República como refundación democrática y nueva esperanza para los ciudadanos del Perú. La refundación de la República es el objetivo que debe permitirle a la izquierda democrática articular una visión de país y convocar a una pluralidad muy grande de actores sociales y políticos para lograr un gobierno que termine definitivamente con el péndulo dictadura/democracia e identifique ejercicio democrático del poder con justicia, transparencia, eficacia y bienestar. Esta debe ser la gran transformación a la que aspiramos, la gran transformación que nos pondrá en camino a una sociedad más democrática e igualitaria.

Por un Partido Socialista para cambiar democráticamente al Perú

Los socialistas somos orgullosos herederos de una tradición universal con más de 200 años de antigüedad que ha luchado en todo el planeta por la justicia social, la igualdad y la libertad. Esta tradición le ha brindado ya inmensos beneficios a la humanidad, que han permitido una lucha eficaz contra la explotación capitalista y la dominación imperial, la consolidación de sociedades democráticas en países de diverso grado de desarrollo y la extensión de los derechos, individuales y sociales, a millones de pobladores del globo. Los socialistas en nuestra historia hemos ensayado múltiples caminos para conseguir nuestros objetivos, unos exitosos, otros fallidos e incluso algunos gravemente equivocados, demostrando en este curso que la vía democrática, de la participación ciudadana en la lucha por la justa distribución de la riqueza, ha sido la que ha permitido logros más profundos y duraderos. De allí nuestra opción por el camino de la libertad para conseguir igualdad y justicia social. En nuestro país los socialistas hemos participado de manera importante y a veces decisiva en la lucha por la democratización de la sociedad y del Estado, habiendo tenido logros muy significa-

tivos pero también sufrido derrotas que nos deben llevar a la necesaria reflexión y autocrítica. En este proceso, hoy que buscamos renovar nuestra tradición, afirmamos la vigencia de nuestras banderas históricas frente a problemas secularmente irresueltos de justicia, igualdad y libertad, pero optamos por el camino democrático del cambio social para luchar a tono con los tiempos y las urgencias de nuestro pueblo y de los pueblos de América Latina y del mundo.

I. El contexto de la fundación partidaria

1. La reflexión sobre la identidad del partido que buscamos fundar tiene que darse en un contexto caracterizado por dos procesos fundamentales: la creciente globalización de las relaciones humanas y la transición y consolidación de la democracia en la que se encuentran inmersos el Perú y América Latina respectivamente. Globalización y transición a la democracia son las características de nuestro tiempo en medio de las cuales nos deberemos desenvolver y cuyas contradicciones tendremos que enfrentar y resolver de acuerdo a nuestros objetivos, ideario y programa.

2. La globalización es un proceso histórico que se da al margen de nuestra voluntad como producto de la intensificación de las relaciones humanas. Este proceso es actualmente hegemonizado por el neoliberalismo, que quiere someter el planeta a los designios del gran capital y, en el momento actual,

al poder político y militar de Estados Unidos. Esta, sin embargo, es una hegemonía que enfrenta el reto de los que buscamos globalizar la democracia, la justicia y el bienestar. La transición, por otra parte, es un proceso en disputa que enfrenta a los que buscan una democracia limitada y precaria, sometida al poder de los grandes intereses económicos nacionales e internacionales y aquellos que luchamos por una democracia amplia y profunda, en la que la participación de la población acerque los representantes a los ciudadanos y donde todas las esferas de la vida, incluida la económica, respondan a las necesidades y a la voluntad de las personas en una sociedad democrática.

3. La transición a la democracia, además, tiene para nosotros un significado particular, porque no sólo significa el pasaje de un gobierno autoritario a otro democrático, sino el desarrollo de la democracia misma, que nunca ha echado raíces en nuestro país. Ello significa el inicio de un proceso de refundación de la República que liquide definitivamente el cascarón de la vieja república criolla y nos lleve a una nueva República Democrática, Social y Descentralista como objetivo estratégico central del partido.

II. Crisis y renovación de la política

4. Buscamos fundar este nuevo partido en un momento de crisis de la política como una actividad que podía producir cambios positivos en la

vida social. Esta crisis, que tiene una connotación planetaria, se presenta, sin embargo, de manera aguda en nuestro país, donde la política es identificada por sectores importantes de la población como una actividad en la que sólo se toma parte para sacar provecho personal. En nuestro caso, este fenómeno tiene a la base la crisis de una forma de hacer política como un arreglo entre notables, grandes y pequeños, que apuntan al intercambio de prebendas producto del manejo corrupto de los recursos públicos. Nuestra labor debe tener por ello como uno de sus objetivos fundamentales la renovación de la política a fin de darle un nuevo sentido a esta actividad, que la entienda como la participación de la población para el logro de una justa distribución de los recursos de la sociedad. Este renovado entendimiento de la política debe dar paso a una competencia sana entre diversas propuestas en beneficio del pueblo soberano.

5. La crisis de la política, sin embargo, es también la crisis de la representación democrática. El pueblo no se siente representado en quienes elige como sus mandatarios, incluso poco tiempo después de haberlos elegido. Esta crisis de representación es la base de la desconfianza en la actividad política y de su solución depende que la política vuelva a ser una actividad creadora desde la cual se pueda transformar la vida social. Por ello, es de crucial importancia proponer una solución a la crisis de representación por la vía de la participación social y política de la población, que permita

articular participación y representación para el logro de una democracia avanzada que se ocupe del bienestar de la población. El partido, en este sentido, debe convertirse en un canal de promoción de la participación política de los ciudadanos.

6. La perspectiva de nuestra acción política, en las condiciones de construcción de la sociedad democrática, debe ser la competencia y no el enfrentamiento. La competencia supone asumir el pluralismo político como un valor central de nuestra conducta, lo que significa reconocer a las otras opciones democráticas, de izquierda, centro y derecha, como adversarios que merecen el debido respeto y no como enemigos a los que hay que someter o eliminar. Este es un cambio de conducta difícil de conseguir para nosotros por la tradición política de enfrentamiento que existe en nuestro país debido al predominio de formas autoritarias impuestas por un orden de dominación excluyente. Sin embargo, justamente por esa razón, el cambio del enfrentamiento a la competencia adquiere una gran importancia para la renovación de la política en el Perú.

7. Nuestro objetivo, por ello, al querer fundar un Partido Socialista no es un objetivo sectario de fundar un partido que eventualmente quiera convertirse en Estado, sino que apunta a construir un sistema plural de partidos políticos que dé sustento al régimen democrático y construya un Estado de todos en cuyo gobierno se turnen por la vía electoral las distintas opciones democráticas.

8. En democracia la competencia tiene a su vez como contraparte la cooperación. Competir supone estar listo para dar paso a la cooperación con otras fuerzas políticas, tanto cercanas como diferentes, para que el gobierno pueda ser posible. La predisposición a la cooperación implica voluntad de llegar a acuerdos que sienten las bases para la viabilidad de la democracia. La competencia, la cooperación y los acuerdos son parte de una cultura democrática que debemos ayudar a establecer en el Perú como parte de este esfuerzo por renovar la política en que estamos empeñados.

9. Esto no quiere decir que no haya necesidad de enfrentar alternativas autoritarias, nacionales o extranjeras, sea cual fuere la forma en que se presenten, con la pretensión de impedir el ejercicio de nuestro derecho a hacer política y/o de interrumpir el proceso democrático. Reivindicamos, en este sentido, el derecho a la insurgencia en defensa de la democracia que está consignado en varias de nuestras constituciones. De igual forma, reivindicamos el derecho de los pueblos a movilizarse y enfrentar a las malas autoridades que abusan del poder y erosionan con su mala conducta los fundamentos del régimen democrático.

III. Ruptura y continuidad con nuestra herencia socialista

10. En consonancia con lo anterior, y para que la renovación sea posible y creíble, debemos esta-

blecer una ruptura y una continuidad con nuestra anterior trayectoria política socialista. Debemos romper explícitamente con una tradición que en el Perú ha estado dominada por el marxismo-leninismo como ideología de Estado y pensamiento totalitario, y asociada a las ideas de conflicto perpetuo, partido de clase, lucha armada, asalto al poder y dictadura revolucionaria. Esta tradición consideraba al marxismo como una ciencia y a la revolución como una cuestión inevitable, al margen de la voluntad de las personas y, las más de las veces, por encima de ellas. Esta es una concepción del socialismo sepultada en el mundo con la caída del muro de Berlín y en el Perú con la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA y la división de Izquierda Unida. Buscar resucitarla sólo será antecedente de nuevas derrotas que pueden llevar a la cancelación de cualquier proyecto progresista por muchas décadas.

11. No somos, por lo tanto, portadores de una "buena nueva" que traigamos al mundo ni de alguna verdad que los demás deban aceptar. Tenemos, nada más y nada menos, que una propuesta de transformación democrática de este país que esperamos difundir entre la ciudadanía y contrastar con otras propuestas de diferentes sectores del espectro político para poder llegar a través de la deliberación pública, libre y democrática, a los mejores resultados para el Perú. Algunas veces, esperamos que sean las más, ganaremos; otras, perderemos, pero, si el proceso es democrático, nuestro deber

ético es defender el régimen político y no hacerlo saltar por los aires.

12. Hay, sin embargo, que establecer una continuidad con el proceso de democratización social y política que desató la izquierda peruana en las décadas de 1970 y 1980. Este proceso de democratización contribuyó al término de la sociedad oligárquica, lo que permitió que millones de compatriotas accedieran a la ciudadanía y fueran reconocidos por el "Perú oficial" como sujetos de derecho que debían gozar de democracia y bienestar y a los cuales había que respetar en su condición individual y social. Esta democratización, además, abrió paso a una organización de la sociedad nunca antes vista en el país que es el antecedente más importante de la actual sociedad civil. Este proceso es una referencia fundamental para la ulterior democratización que proponemos en camino a nuestros objetivos estratégicos.

13. De la misma forma, debemos establecer una continuidad, de acuerdo a la trayectoria vital de quienes conformamos este proyecto, con aquellas vertientes de pensamiento crítico en la izquierda peruana que, partiendo de un marxismo abierto, desarrollaron reflexión propia. En particular, con el pensamiento de José Carlos Mariátegui, que nos señaló tempranamente que "el socialismo en el Perú no será calco ni copia sino creación heroica".

14. En este mismo sentido, aquellos que hemos tenido responsabilidad en el período anterior de la

izquierda peruana debemos hacer explícitos nuestros errores, de manera pública y transparente, para que nuestro ejercicio personal y colectivo de la representación política tenga legitimidad ética y política entre la población. Esto es especialmente importante para nuestros voceros públicos; de lo contrario, dejaremos un flanco para nuestros enemigos y adversarios políticos que seguramente será aprovechado, tanto en la movilización social como en la competencia electoral, para desacreditarnos frente a la ciudadanía.

15. Es importante, asimismo, reivindicar la consecuencia de quienes hicimos política, más allá de nuestros graves errores, con las manos limpias de sangre y dinero ajenos, cuestión que adquiere relevancia cuando vemos al país aún encharcado en la corrupción, antigua y nueva, e incapaz de lidiar con la impunidad de los crímenes de la guerra interna. Esta consecuencia es la que nos debe permitir hoy tener la audacia y el coraje para hacer muy explícitos frente al país los cambios que hemos procesado en los últimos años de cara a producir una transformación que esté a la altura de los tiempos.

IV. Nuestra visión socialista

16. Nuestro objetivo supremo como socialistas es la emancipación humana de toda forma de dominación y explotación social, sea esta de clase, etnia, género, edad y/o procedencia re-

gional. Este proceso emancipador debe permitir a la persona humana el libre ejercicio de sus capacidades para alcanzar su pleno desarrollo, tanto individual como colectivamente. Este objetivo emancipador está guiado por un conjunto de valores fundamentales que son: la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad.

Libertad: es la posibilidad de ejercer individual y colectivamente los derechos que nos corresponden como seres humanos, sin coerción, tanto económica, causada por la explotación capitalista, como política, producto de la dominación estatal, que nos impida hacerlo; de cumplir con nuestros deberes como ciudadanos de una determinada comunidad, y de gozar de las condiciones para que este ejercicio de derechos y deberes sea factible.

Justicia: es la distribución de los recursos de la sociedad de acuerdo a las necesidades básicas y al esfuerzo de las personas, de manera tal que nadie, por ninguna razón, se quede sin lo necesario para vivir y acceder a las oportunidades que brinda la sociedad.

Igualdad: es el reconocimiento de que todos los seres humanos, más allá de su origen social o sus cualidades personales, tienen los mismos derechos y deberes, deben tener acceso a las mismas oportunidades, así como también las condiciones materiales y espirituales para su realización personal y social.

Solidaridad: es la colaboración entre las personas, tanto individualmente como a través de la organización social para conseguir y defender el interés general. La solidaridad potencia al individuo y le permite el desarrollo de su creatividad ya que es una enorme fuente de riqueza social.

En el Perú estos valores, de distintas formas y en diferentes circunstancias, han sido banderas de los movimientos populares y regionales contra la dominación oligárquica y la explotación capitalista. En estas luchas es que el pueblo peruano le ha encontrado sentido a la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad, porque ha descubierto la importancia del usufructo de sus derechos y la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes para convertirse en ciudadanos, así como la relevancia del esfuerzo conjunto para enfrentarse a enemigos inmensamente más poderosos.

V. La definición socialista del partido

17. El partido que pretendemos fundar se define como socialista porque su objetivo es profundizar la democracia por la vía de la participación política de la población, combatir la desigualdad en sus múltiples manifestaciones y promover la justa distribución de la riqueza. No se trata de expropiar a los propietarios para conseguir la liberación de la humanidad como pensó el socialismo del siglo XIX y buena parte del XX, sino de superar las formas de dominación y explotación inherentes al capita-

lismo a través del desarrollo de la participación de la ciudadanía en todas las esferas de la vida económica, social y política. No es un socialismo patrimonial, de expropiación de la propiedad, sino participativo, de compromiso de los ciudadanos, el que perseguimos. Esta definición asume que en el conflicto entre producción social y apropiación privada de las mercancías desarrollemos los mecanismos de control público necesarios para combatir la explotación capitalista y efectuar una justa distribución de la riqueza.

18. Nuestro socialismo no supone una ideología cerrada y bebe de diversas fuentes, tales como el humanismo, el cristianismo, el marxismo e incluso el liberalismo. Esta diversidad de fuentes permite afirmar el carácter de herramienta política del partido y diferenciarlo de las capillas y sectas que dominaron épocas pasadas. Asimismo, nos permite enriquecer las características del objetivo supremo emancipador de toda forma de dominación social, que es la columna vertebral de nuestra visión estratégica.

19. Este socialismo supone la búsqueda de una sociedad democrática, que deberemos compartir con otros de diferentes convicciones que nosotros. Una sociedad que sea democrática no sólo por el ejercicio del voto sino porque todos tengan las condiciones y las oportunidades para su realización personal y colectiva. Esta sociedad es la que parcial y precariamente se ha empezado a construir varias veces en el Perú. Debemos aprender de la

experiencia y de sus logros para proyectar el poder político a partir de la sociedad organizada y de esta manera avanzar desde abajo en conseguir un Estado democrático.

VI. El partido y la transformación democrática

20. Tener como objetivo la profundización de la democracia, el combate a la desigualdad y la justa distribución de la riqueza supone aspirar a una profunda transformación económica, social y política en el Perú. De lo contrario, no pasaremos de los cambios cosméticos. Esto significa que pongamos al país en un camino nuevo, distinto del actual, que se debate entre la democracia precaria y limitada y la dictadura abierta. Este camino es el de la refundación de la República que busca la superación de la vieja república criolla y el establecimiento de una democracia que articule participación con representación política.

21. Esta transformación, sin embargo, ya no puede tomar el camino revolucionario del asalto, usualmente violento, que diseñaba la concepción del socialismo autoritario. Este camino revolucionario ha caducado históricamente. Se trata ahora de avanzar por el camino democrático y pacífico, que se ha probado como el más eficaz para obtener cambios duraderos en un proceso largo en el que deberemos desarrollar no sólo una gran influencia social y política, sino una hegemonía cultural que nos dé legitimidad entre la población.

22. Este camino supone ampliar y profundizar las instituciones democráticas producto del voto ciudadano, sin establecer paralelismos que erosionen el funcionamiento democrático. Sin embargo, no restringe nuestra labor de transformación a la esfera político-electoral, sino que promueve otras formas de participación democrática de la población que buscan la expresión de la diversidad, permitiendo e impulsando movimientos sociales que persiguen la afirmación de distintos intereses en un ambiente de tolerancia y equidad.

VII. El partido y el Estado

23. Esta definición del socialismo como profundización de la democracia para el partido que queremos fundar tiene un significado fundamental en nuestra relación con el Estado. En la concepción autoritaria se trataba de destruir el Estado y construir uno nuevo, lo que sólo es posible como producto de una guerra victoriosa. La conversión de los Estados liberales en Estados sociales, por la vía de la lucha democrática, en muchas de las democracias desarrolladas señalan como falsa esta premisa. Hoy hay que encontrar la forma de democratizar el Estado a partir y desde los procesos exitosos de democratización de la sociedad. Esto, por supuesto, no significa aceptar el carácter clasista y excluyente del Estado actual, sino más bien pugnar porque se convierta de un Estado de minorías en un Estado social que responda a los intereses de la mayoría de la sociedad.

24. En este sentido, debemos apoyar el desarrollo del incipiente Estado de derecho recuperado con la caída de la dictadura y el inicio de la transición a la democracia. Como en otros asuntos, este es también un tema en disputa. Aquí competimos entre los que queremos desarrollar este Estado de derecho como un Estado Social y Democrático de Derecho, que desarrolle las garantías para la realización plena de toda la población, y aquellos que quieren limitar el orden jurídico a la defensa de la propiedad privada y los derechos individuales. Esta disputa, sin embargo, no debe llevarnos a rechazar el actual Estado de derecho, que, a pesar de sus limitaciones, es un logro de la lucha popular, sino más bien a desarrollarlo de acuerdo a nuestra visión y nuestro programa.

Un ejemplo de nuestro respeto al Estado de derecho y de nuestra voluntad de profundizarlo es la lucha por la inscripción legal que finalmente hemos conseguido.

VIII. El partido de ciudadanos y movimientos sociales

25. Nuestro partido debe definirse entonces como un partido de ciudadanos y movimientos sociales que busca canalizar los intereses de la mayoría de la población, organizada y no organizada, promoviendo su participación a partir de nuestras propuestas y aprendiendo de ella para sistematizar mejor sus intereses. La definición de nues-

tro partido como un partido de ciudadanos y de movimientos sociales es lo que le permitirá ganar un espacio en la opinión pública e influir en su conformación y desarrollo. Esta es la única manera, aspirando a expresar y canalizar a la mayoría de la población, en que tiene sentido actuar en la arena de la competencia política electoral teniendo intenciones serias de ganar y ser gobierno.

26. Calificar nuestro partido como una organización de ciudadanos supone también un reto formidable por el poco desarrollo de la ciudadanía en nuestro país. En un primer momento será más una expectativa que una realidad; sin embargo, ello nos debe llevar a afirmar la necesidad de forjar una organización de iguales que sean capaces de promover el desarrollo de una democracia que combata la desigualdad social. El partido de ciudadanos supone un arduo trabajo de politización de la sociedad, persuadiendo a nuestros compatriotas que en buena parte han accedido a múltiples derechos, tanto individuales como sociales, a que se organicen y luchen por su derecho a participar en la vida política del país. El partido de ciudadanos debe tomar el liderazgo en la forja de una democracia de ciudadanos que impida la reproducción de las diversas formas de dominación y explotación social que hemos señalado.

27. El partido de ciudadanos es la mejor herramienta para expresar y canalizar también a los movimientos sociales; es decir, a aquel sector de la

población organizada que se encuentra luchando por sus reivindicaciones. Una victoria de singular importancia que obtuvo el fujimorismo fue desterrar los movimientos sociales de la escena política, convirtiéndolos en los parias de la política nacional, a los que identificaba con el terrorismo y la subversión. Nos toca revertir esta situación regresando los movimientos sociales a la política nacional, pero haciéndolo en una perspectiva democrática, para construir la institucionalidad participativa y representativa, y no para destruirla, como plantea la izquierda autoritaria. Los movimientos sociales se convertirán así en una fuente de primer orden para el desarrollo del partido, ayudándolo a establecer su relación con la sociedad, brindando adherentes y militantes entre los mejores luchadores sociales e impulsando el desarrollo de nuevas y mejores propuestas programáticas a su influjo.

28. Para poder concretarse como partido de ciudadanos, este debe ser un partido radicalmente abierto a la población, no sólo para recoger sus demandas, sino también para promover su participación, en primer lugar en nuestras propias filas así como en los diversos ámbitos de la vida económica y social. La política de pequeños círculos cerrados promovida por las teorías conspirativas y la represión autoritaria es la negación del partido democrático y abierto que queremos formar. Debemos tener en cuenta que el crecimiento de la organización será imposible si damos saltos cualitativos en la apreciación pública pero mantenemos

una estructura cerrada y sectaria que no permita capitalizar nuestro desarrollo entre los ciudadanos.

29. Nuestra apertura debe significar ante todo llegar a las nuevas generaciones, que no tuvieron la experiencia de Izquierda Unida y que, en buena medida, fueron alejadas de la política por la corrupción y la prédica autoritaria de la década pasada. Para llegar a las nuevas generaciones hay necesidad de un esfuerzo especial que abra espacios y brinde oportunidades a los más jóvenes, que son los portadores de las nuevas sensibilidades sociales y políticas de la población.

30. Nuestra apertura como partido de ciudadanos debe significar también nuevas y especiales oportunidades a las mujeres, tradicionalmente relegadas en nuestra sociedad, pero particularmente relegadas en nuestra política y en los partidos de la izquierda anterior. Al respecto, debemos demostrar renovación democrática pero también una mayor equidad de género en nuestros equipos de dirección a todos los niveles del partido y, eventualmente, del gobierno.

IX. Nuestro espacio de desarrollo político

31. Las características de nuestro partido lo llevan a buscar su espacio de desarrollo político en el terreno de la izquierda democrática. Ello supone que nuestra organización se convierta en un eje de unidad de los diversos grupos y personalida-

des que plantean la necesidad de transformar democráticamente el Perú. Debemos desarrollar un paciente trabajo de unidad política y orgánica bajo la bandera de la refundación de la República, en el que de ninguna manera se antepongan ambiciones personales o de grupo que entorpezcan o posterguen esta indispensable unidad. Esta definición del espacio de la izquierda democrática nos aleja ciertamente de la izquierda autoritaria, que continúa con la antigua dinámica de aprovechar la democracia para acumular fuerzas en función de supuestos objetivos revolucionarios. Nuestro camino es distinto y se basa en el compromiso con una democracia que, a pesar de sus serias limitaciones, es un logro de nuestro pueblo que esperamos profundizar para su beneficio.

32. Somos conscientes, sin embargo, de que las fuerzas de la izquierda democrática son insuficientes para la transformación que proponemos, por lo que hay necesidad de una alianza progresista mayor que apunte al gobierno de mayoría nacional capaz de realizar nuestros objetivos. El partido deberá, de acuerdo al desarrollo de la situación política nacional, ver la mejor manera de abrirnos al espacio de la izquierda democrática y de la necesaria confluencia progresista.

X. El cambio de imagen

33. Posicionarnos en la opinión pública es imposible con la imagen actual que tenemos, por-

que los medios de comunicación masiva y buena parte de la población nos asocian más con algo viejo, que estamos dejando de ser, que con lo nuevo que estamos tratando de proponerle al país. La imagen es una combinación de propuesta, personas, organización, asentamiento social y capacidad de proyección en la esfera pública. En todos estos elementos está presente un mensaje que es con el que finalmente nos identifica la ciudadanía. Nuestro antiguo mensaje, cuyos componentes son demanda, lucha, movilización, asalto, dictadura, concesión tiene que ser depurado de su entraña autoritaria para convertirlo en un mensaje que sea demanda, movilización, competencia, participación, acuerdo, democracia, resultados. En el primer caso teníamos la verdad y había únicamente necesidad de imponerla; en el segundo tenemos una propuesta que busca recoger necesidades e intereses sociales y queremos comunicarla y contrastarla con la de otros sectores para obtener los mejores resultados para el país. Antes nos creíamos el "todo absoluto" destinado a realizarse en la toma del poder; ahora nos asumimos como una parte del todo democrático que es una construcción plural, de varios, desde la izquierda, el centro y la derecha democráticos. Esta imagen de "parte democrática", que aspira a construir un "todo plural" es la que no tenemos y debemos construir para poder aspirar al logro de un gobierno progresista de mayoría nacional.

34. Esto supone cambiar la imagen de nuestra propuesta poniendo por delante el tema de la esperanza en la posibilidad de la transformación democrática y de un futuro productivo y de bienestar para el Perú. Supone cambiar la imagen de nuestros líderes para que puedan transmitir esperanza y bienestar. Nos obliga a presentar de inmediato equipos de gobierno a nivel regional y nacional que expresen, además de la nueva imagen, nuestras alianzas y nuestra propuesta. Nos exige pasar de la organización de cenáculo a la organización ciudadana abierta y convocante. Para todo esto tenemos los recursos humanos y programáticos, pero nos falta la audacia para atrevernos a dar el salto y "aparecer diferentes".

Resignificar el socialismo en el Perú

1. Introducción.

Para volver a pensar la cuestión del socialismo en el Perú, hay necesidad de resignificar el término. Es decir, hay necesidad de cambiar la definición particular que la palabra socialismo tomó en el país. De otra forma, el esfuerzo se convierte en una empresa inútil.

Cuando decimos resignificar el término nos estamos refiriendo a la identidad que la palabra socialismo tuvo en estas tierras. Con ello no aludimos a sus referencias más generales como justicia, libertad, cambio, solidaridad, sino más bien a las referencias específicas que tomó en el Perú como revolución, lucha armada, dictadura del proletariado, partido de clase, etcétera. Es decir, a las referencias que concretizaban los valores del socialismo y que tuvieron como ordenador ideológico al marxismo-leninismo. Esta resignificación es una tarea ardua, de pronóstico reservado, y cuya única justificación es la continuación, particularmente aguda en nuestro país, de los problemas de exclusión política, desigualdad social y explotación económica que dieron origen al mo-

vimiento socialista en el mundo y también en el Perú.

La necesidad de esta resignificación no es una ocurrencia gratuita sino tiene que ver con los importantísimos cambios habidos en el mundo en los últimos años; cambios de tal magnitud que sólo el futuro nos dirá si estas transformaciones constituyen un verdadero cambio de época. Estos cambios, ocurridos a nivel planetario, se expresan en la globalización de las relaciones humanas y tienen como telón de fondo la tercera revolución industrial o "revolución tecnológica", cuyo impacto llega crecientemente, como integración y exclusión, a la vida cotidiana de las gentes. Los cambios, sin embargo, se producen bajo el signo ideológico de una variante de la doctrina liberal, el neoliberalismo, que expresa el triunfo de la racionalidad instrumental, utilitaria, que supuestamente se basa en la libre iniciativa del individuo aislado, y el de uno de los caminos posibles a la modernidad como es el capitalismo.

Estos cambios, que significan un progreso fundamental en tanto un mayor dominio por parte de los seres humanos del medio en que se desarrollan, suponen también la derrota de quienes plantearon una perspectiva crítica del orden capitalista en el planeta, proponiendo una racionalidad solidaria y no egoísta en el manejo de las relaciones humanas. Esta derrota toca particularmente al socialismo como el movimiento más importante de

crítica progresista a la modernidad en el último siglo y medio de historia de la humanidad.

El efecto, sin embargo, no es el mismo en las distintas vertientes que se reclaman del socialismo. En primer lugar, esta derrota afecta al comunismo, propuesta autoritaria que se plasmara como ideología de Estado en los denominados países del "campo socialista" y que fuera la principal influencia del movimiento socialista en el Perú. El comunismo es la última gran utopía totalitaria que colapsa en este período de globalización mundial.

Sin embargo, el triunfo de la racionalidad instrumental capitalista no sólo afecta al comunismo sino también a la otra gran corriente del movimiento socialista, que es la socialdemocracia. Esta última, que por su carácter democrático y reformista ostenta logros muy significativos en la conquista de derechos políticos y sociales, ve cuestionado el rol preeminente que le dio al Estado como protagonista de las transformaciones propuestas en un momento de crisis fiscal del mismo y de crítica a la burocratización de los servicios públicos. Tenemos entonces que el colapso del comunismo, no nos lleva necesariamente a la alternativa socialdemócrata, sino nos señala, más bien, la necesidad de proceder a una revisión crítica para esbozar nuevas alternativas.

En el Perú la coincidencia de dos fracasos expresados en la caída del muro de Berlín y en la ruptura de Izquierda Unida, ambos ocurridos en 1989,

en el contexto del fracaso también de un gobierno populista —el gobierno aprista de Alan García— han llevado a la bancarrota no sólo del socialismo, sino de toda idea de cambio en pos de la justicia social. Hay dos actitudes entre los que militaron en las filas del cambio frente a esta bancarrota, ambas plenamente justificadas: la de aquellos para los que, en el mejor de los casos sólo queda la posibilidad de hacer un inventario del pasado para archivarlo definitivamente y así poder seguir viviendo, y la de aquellos para los que hay necesidad de una revisión que vuelva a plantear en nuevos términos la vigencia de los viejos e irresueltos problemas de justicia y democracia a los que ya aludíamos.

Los tiempos para esta revisión son particularmente negativos. El socialismo, y por extensión la izquierda, constituyen algo así como una “antitarjeta” de presentación en el Perú de hoy. Es más, la contraofensiva reaccionaria en curso se presenta también como una propuesta de cambio que incide, sobre todo, en los errores que llevaron a la bancarrota al socialismo, por lo que hace más difícil todavía repensar el mismo en función de una propuesta de futuro. La única forma de superar esta dificultad es con audacia, una audacia que sólo puede medirse por su capacidad de abordar los problemas verdaderamente sustantivos.

El objetivo de estas líneas será, por ello, señalar en forma esquemática los que considero son los principales elementos de esta resignificación.

2. La crisis de la política en el Perú

Para repensar el socialismo hay necesidad de caracterizar la crisis actual de la política en el Perú, lo que nos permitirá señalar la pertinencia de una alternativa socialista para señalar un posible camino de solución de la misma.

Lo que sucede en el Perú en los últimos años no es solamente la crisis de un gobierno o del régimen democrático. Más que eso es la crisis de una forma de hacer política que la democracia constitucional inaugurada en 1980 heredó del orden oligárquico. Se trata de la forma elitista de hacer política entendida como una competencia y a la vez un "arreglo" entre notables para repartirse los recursos que permite la gestión del poder del Estado. Este manejo elitista de la política entró en grave contradicción, en la década de 1980, con la importante multiplicación ciudadana ocurrida algunos años antes. Tanto las reformas velasquistas que propiciaron, a favor y en contra de aquel régimen, la organización popular, como las provisiones de la Constitución de 1979 que dieron el voto a los analfabetos y lo extendieron a los jóvenes entre 18 y 21 años, permitieron, por primera vez en nuestra historia, la extensión de la ciudadanía, nominalmente hablando, a toda la población adulta del Perú. Los nuevos portadores de derechos, sin embargo, encontraron rápidamente serias limitaciones para el ejercicio de los mismos. La joven democracia no brindaba los mecanismos de participación y control

necesarios a través de los cuales el pueblo pudiera pedirle cuentas a sus representantes. Asimismo, los partidos políticos, en su mayor parte, buscaron repetir el orden anterior a 1968 y no actuaron como canales democráticos sino como máquinas de clientela en favor de sus líderes. Se gesta entonces una aguda crisis de representación.

Estas dificultades del régimen político llevaron a los sucesivos gobiernos a una seria incapacidad para enfrentar los más graves problemas del momento: la crisis económica y la subversión terrorista. La debilidad de la democracia representativa en funciones la llevó a abdicar de sus responsabilidades y no proponer alternativas viables en estas cuestiones fundamentales. Esto permitió que "poderes fácticos" (de hecho), que se colocan más allá del escrutinio público, tomaran las decisiones más importantes. Estos poderes son: primero, las agencias financieras internacionales, que, con la colaboración de tecnócratas locales, repetidamente diseñan políticas económicas destinadas a favorecer al gran capital a costa del empobrecimiento de las mayorías populares, y, segundo, las Fuerzas Armadas, que imponen soluciones autoritarias, al margen de la democracia y el respeto a los derechos humanos, en el combate a la subversión terrorista. La expropiación del poder a la democracia selló la suerte del período de vigencia constitucional.

Esta debilidad hizo a la democracia presa fácil de un proyecto neoliberal autoritario que se dio

el lujo de atacarla por su insuficiencia democrática; es decir, por su incapacidad de representación de las mayorías ciudadanas. El proyecto neoliberal autoritario fue capaz de unir las ambiciones de un hombre –Alberto Fujimori– y su estrecho círculo de amigos con los designios de los poderes fácticos, terminando con la precaria democracia constitucional y buscando instaurar un régimen dictatorial.

Fracasa así una forma elitista de manejo de la democracia y es reemplazada, usando un discurso supuestamente más representativo, por una forma todavía más elitista de hacer política, en la que el presidente de la República conjuga sus ambiciones de poder con las presiones de los poderes fácticos para tomar las decisiones fundamentales. Se agudiza entonces la crisis política original que tiene su raíz en el elitismo oligárquico, así como la consecuente crisis de representación ciudadana.

Pretender en estas condiciones repensar el socialismo parece una audacia digna de mejor causa. Sin embargo, si definimos el problema fundamental como la crisis de una forma de hacer política que se expresa hoy como un problema de representación por el cual los ciudadanos no se sienten representados por quienes dirigen o han dirigido los diferentes gobiernos, ni tienen canales para participar en los asuntos del poder, entonces debemos atender a las graves dificultades de los canales de intermediación entre la sociedad y el

Estado, que son los que procesan la representación.

Es más, si profundizamos en la caracterización de la crisis de esta forma de hacer política como una crisis de representación, nos encontramos con que justamente este tema, el de la falta de participación y representación de los ciudadanos en las decisiones que les competen y el casi nulo control de sus representantes, es el tema de preocupación fundamental del socialismo democrático. Cuanto más y mejor participen y estén representados los ciudadanos en la vida social y política de un país, más habrá avanzado la sociedad en su control sobre el Estado y estaremos en camino de realizar la utopía socialista de emancipar a las gentes, en democracia, de toda forma de dominación.

La tarea de repensar el socialismo es entonces también una tarea de refundación de la democracia peruana, ya no sobre las bases elitistas de antaño, sino sobre nuevas bases que deben tener la participación ciudadana en las tareas de gobierno a todo nivel y la mejor y mayor representación de la ciudadanía en las instituciones del Estado como ejes de un nuevo régimen político democrático. La democracia como vida social se convierte así en la norma, el camino y el ámbito en que los ciudadanos producen los cambios necesarios para alcanzar la justicia social.

3. Nuestra herencia izquierdista

Resignificar el socialismo implica, antes que nada, evaluar nuestra propia tradición izquierdista para producir rupturas fundamentales y establecer, a la par, algunas contiuidades.

En nuestro caso, para bien y para mal, somos herederos de una tradición que antecede con creces nuestra propia vida y nuestro país, y que, hasta hace poco, nos ha dominado. Nos toca ahora hacer un inventario de esa herencia para pasar nosotros a dominarla. Nos referimos a la tradición socialista peruana que casi desde sus orígenes ha estado dominada por el marxismo-leninismo. Digo "casi" porque es preciso remarcar la terquedad de José Carlos Mariátegui en oponerse al afán de los comisarios de la Internacional Comunista por controlar al naciente socialismo peruano, insistiendo hasta su muerte en mantener el nombre "socialista" del partido que fundara y el carácter nacional del mismo. La necesidad de romper con esa tradición marxista-leninista que llevó al socialismo en el Perú a una determinada concepción autoritaria del partido, de la lucha por el poder y del proyecto mismo de "nueva sociedad" que se postulaba, es un requisito previo para cualquier formulación novedosa que se pretenda.

Socialismo, y por extensión "izquierda", han estado asociados en el Perú con la idea de un "partido de clase", conformado por militantes profesionales

que estaban llamados a organizar una revolución, a través de una lucha por el poder concebida como un combate militar por la destrucción del Estado, el cual debía ser reemplazado por una "dictadura revolucionaria". En este proceso se aceptaban "todas las formas de lucha", legales e ilegales, políticas y armadas, más allá del régimen político en funciones, porque el enfrentamiento no era al gobierno, por lo acertado o erróneo de sus políticas, sino al Estado por su "carácter de clase". Esta concepción suponía una ideología cerrada, que daba explicación de todos los fenómenos sociales, políticos, culturales y aún naturales. Y, lo que es peor, no admitía réplica salvo de los dirigentes máximos que tenían el monopolio de la interpretación de la realidad.

Esta concepción, como ideología y como práctica, ha entrado en crisis en el Perú porque no ha sabido dar respuesta a las exigencias de participación democrática y bienestar material de las mayorías populares, insistiendo en sus antiguos errores y buscando encontrar los problemas sólo en los otros y no también en ellos mismos.

Empero, la crisis de la izquierda marxista-leninista dista mucho de ser un asunto nativo. La vertiente autoritaria del socialismo, denominada "comunismo", ha perdido total vigencia en el mundo luego de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. La dictadura, tanto en política como en economía, ha demostrado

ser un expediente inviable para alcanzar el bienestar. La identificación del partido con el Estado y la eliminación consecuente de la competencia política, la pluralidad de puntos de vista y la vida pública, llevó al desarrollo de aparatos totalitarios que basaron su poder en el terror estatal implementado por la policía secreta. El poder totalitario, lejos de alcanzar la utopía de "progreso" que lo justificaba, llevó a las sociedades bajo su dominio a la esclerosis y el estancamiento. Pero las razones también, como le gustaría -en cruel paradoja- al viejo Marx, han tenido que ver con la estructura económica. El comunismo perdió la batalla por el desarrollo de las fuerzas productivas. Con la tercera revolución industrial el Occidente capitalista dio tal salto en el desarrollo tecnológico y redefinió del tal forma las relaciones entre el capital y el trabajo -reduciendo drásticamente la importancia del proletariado-, que anuló las posibilidades de ser alcanzado por sus rivales comunistas. Esta victoria no es gratuita; demuestra también la superioridad histórica del mercado como el mejor asignador de recursos en el proceso económico y descarta la planificación centralizada como una lógica alternativa. Esta victoria no santifica al capitalismo ni justifica los métodos salvajes de explotación, que hoy parecen volver con renovados bríos, pero sí nos lleva a replantearnos profundamente el problema de la explotación capitalista y de la propiedad privada de los medios de producción.

En el Perú esta crisis tuvo como "prueba" la democracia. La imposibilidad de convertirse en alternativa viable de gobierno y/o en oposición leal al régimen democrático instaurado a partir de la Constitución de 1979, llevó a la izquierda peruana a la crisis y a su posterior disgregación. Por una parte estaban los que participaban del régimen democrático para aprovechar sus ventajas en términos de agitación, propaganda y organización en función de un proyecto político alternativo y distinto al de la democracia de 1979; por otra, quienes se dieron cuenta de esta grave contradicción e intentaron en la segunda mitad de la década de 1980 desarrollar una izquierda que luchara por el cambio social en los cauces constitucionales y democráticos de 1979. El desprecio de los primeros por la democracia y de los segundos por los avances organizativos y políticos de la izquierda en su conjunto, impidieron la resolución positiva de la crisis. Asimismo, las vacilaciones frente a la acción terrorista de los grupos alzados en armas y la falta de crítica resuelta y oportuna al populismo aprista, por el apego a los viejos dogmas de dirigismo estatal, impidieron la consolidación de una opción seria, creíble y a la vez diferente de la oferta política tradicional.

Sin embargo, este socialismo y esta izquierda desarrollaron, a pesar de su autoritarismo y de sus graves limitaciones, un importante trabajo de organización social y política con las banderas del cambio y de la justicia social. Contribuyeron al

término de la sociedad oligárquica y coadyuvaron decisivamente a la democratización de la sociedad peruana en los últimos 40 años. Este aporte debe ser revalorado en los nuevos términos que aquí planteamos y recogido como una referencia fundamental para el desarrollo del socialismo democrático en el país.

Pero antes de continuar con las características de la propuesta socialista democrática debemos tomar distancia también de otras dos alternativas, una renovada y otra antigua. Me refiero al neoliberalismo y al aprismo, que aparecen como retos, por lo menos ideológicos, a una nueva posición izquierdista.

4. La hegemonía del discurso neoliberal

La crisis final del marxismo-leninismo ha querido ser vista desde la orilla conservadora como “el fin de las ideologías”. Sin embargo, lo que ha sucedido es que, aprovechando el vacío dejado por el rival comunista y basado en el auge capitalista producto de la tercera revolución industrial, se ha producido una hegemonía planetaria del discurso neoliberal.

¿Cuáles son los pilares de este renovado discurso?

Primero, su presentación como un discurso “no ideológico” y “no valorativo”. El neoliberalismo no representaría intereses específicos y más bien sería la forma “moderna” de funcionamiento de las

sociedades. Sus formulaciones, más que expresar un planteamiento, serían la “descripción” de lo que objetivamente sucede en la realidad.

Segundo, su afirmación de la primacía absoluta del individuo sobre cualquier forma de colectivo u organización social, así como su señalamiento del individuo –propietario como el motor exclusivo del desarrollo social. De igual forma, la definición restringida de ciudadanía que rechaza las demandas organizadas de la población, en especial el reclamo colectivo de derechos ciudadanos, por considerarlas una amenaza a los ciudadanos individuales, en particular si son propietarios.

Tercero, su afirmación de la primacía absoluta del mercado, que funcionaría espontáneamente a partir de una “mano invisible”. En esta perspectiva se considera al mercado no sólo como el mejor asignador de recursos en la esfera económica, sino también el espacio privilegiado de igualdad social, identificándolo con la sociedad en su conjunto. El mercado se encargaría, de acuerdo a este punto de vista, de regular en forma automática el quehacer económico, social, cultural y político. Cualquier interferencia en este mecanismo por parte de la voluntad humana se considera distorsionador del normal funcionamiento de la sociedad y raíz de posteriores “ajustes” para regresar las cosas a su “orden natural”.

Cuarto, como resultado de estas premisas se plantea la reducción del Estado a su mínima expresión, restringiéndolo a la labor de garantizar

las mejores condiciones para los negocios privados de los ciudadanos y retirándolo de cualquier rol de intervención en la vida social, ya sea regulando la actividad económica o brindando servicios sociales a la población.

Quinto, una política de poner en manos del gran capital la mayor cantidad de recursos y de darle las mayores facilidades en todos los planos para su desenvolvimiento, por considerar que la lógica privada de uso de esos recursos y facilidades promoverá el desarrollo económico de la sociedad en su conjunto.

Por último, el señalamiento de que lo más importante es el desarrollo de una economía de mercado, pudiendo interrumpirse, restringirse o postergarse los procesos de democratización social y política de acuerdo a las necesidades señaladas.

La identidad entre mercado y sociedad es una grave distorsión de la ideología neoliberal porque reduce la vida social a una lógica de ganancias y pérdidas, en la que los individuos hacen o dejan de hacer cosas de acuerdo a los beneficios que puedan obtener. Asimismo, este punto de vista asume el mercado como una esfera de competencia que supuestamente igualaría a los individuos en la lucha por conseguir ganancias, cuando en realidad se trata de actores sociales que acuden al mercado en posiciones desiguales, recibiendo, en la abrumadora mayoría de los casos, un trato de acuerdo a su condición original.

Esta hegemonía del neoliberalismo ha encontrado terreno propicio en el Perú por el agotamiento de las políticas denominadas "populistas", que se sucedieron a lo largo de varios gobiernos: el primer belaundismo, el reformismo velasquista y el gobierno de Alan García. El populismo cumplió una función en el inacabado tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna en el Perú, alentando la movilización social, impulsando la redistribución del ingreso y concediendo derechos económicos y sociales de ciudadanía. Sin embargo, el rol excluyente del líder que impide el desarrollo de formas de institucionalidad democrática, el privilegio unilateral del Estado en la intervención y el control de la actividad económica, los intentos (en especial del velasquismo) por controlar la movilización social, así como la corrupción de burócratas y empresarios (durante el gobierno aprista), llevaron a esta forma de hacer política a su crisis final. Esta crisis no sólo acarreó el desprestigio del populismo, sino también el de todo discurso que reivindicara al Estado, que tuviera relación con la movilización social y que planteara de alguna manera la necesidad del cambio social.

La hegemonía neoliberal en el Perú es por ello una hegemonía conservadora y restauracionista que usa el discurso del mercado para favorecer antiguos intereses minoritarios que habían perdido sus privilegios en décadas anteriores. Agrega entonces a las características señaladas la especial afirmación en el Perú de una dominación de

grupos minoritarios con características étnicas y clasistas definidas, que tiene como objetivos restringir la ciudadanía a los individuos-propietarios y borrar todo rastro de Estado Social.

5. El agotamiento histórico del Apra

Un partido que tempranamente buscó levantar las banderas de la justicia social y la libertad política ha sido el Partido Aprista, y que quiere presentarse por ello como un partido socialdemócrata.

Por sus principios y trayectoria se convirtió en el partido antioligárquico más importante del siglo xx y el representante más caracterizado de lo que hemos denominado populismo. Sin embargo, sus principios ideológicos, las características de su liderazgo y las dificultades de su trayectoria lo han llevado a su agotamiento histórico como opción política que pueda enarbolar los principios de emancipación de alguna forma de dominación social.

La tesis del Estado como el actor fundamental del cambio social, formulada en textos aurorales como el "Estado antiimperialista", el planteamiento de una concepción corporativa de la representación política a través del denominado "Congreso económico", y el rol protagónico y excluyente del partido, van a llevar al APRA a desarrollar una idea y una práctica autoritarias de la política. La concepción del rol fundamental del Estado surge en la doctrina aprista ante la ausencia

de clases populares desarrolladas que pudieran llevar adelante la transformación de la sociedad. Sin embargo, esto los lleva a privilegiar el dirigismo estatal en la acción de gobierno. Igualmente, la preferencia por soluciones corporativas frente a la exclusión oligárquica no les permite valorar el desarrollo de la ciudadanía en la construcción democrática. Asimismo, el desarrollo de una sólida, disciplinada y jerarquizada maquinaria partidaria, fundamental en sus inicios ante la represión estatal, los lleva a desarrollar una cultura política sectaria con restringida capacidad de hegemonía social en su actuación organizativa.

Estos planteamientos no les permiten apreciar el importante desarrollo de la sociedad civil, en particular de los nuevos sectores populares organizados entre las décadas de 1960 y 1980, colocándolos relativamente al margen de los procesos que hoy permiten afirmar la necesidad de una alternativa de cambio que se gesta y desarrolla en la sociedad y no admite el reemplazo de esta por el Estado por más "antiimperialista" que sea.

A sus planteamientos ideológicos se unen las características de su liderazgo. En un primer momento, la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, que desarrolla un extraordinario liderazgo carismático sobre sus seguidores, conforma una comunidad de creyentes en su persona y a través de ella el programa inicial. Luego, la erosión de este liderazgo por el incumplimiento del líder al

no producirse la llegada al gobierno, no realizarse el programa y finalmente pactar con el enemigo oligárquico.

En este momento de deterioro del liderazgo carismático, entre las décadas de 1950 y 1960, el APRA pudo convertirse en una comunidad ciudadana, democratizando el partido y permitiendo el acceso a su dirección de generaciones más jóvenes. Sin embargo, el líder carismático (Haya de la Torre) no quiso o no pudo abandonar su rol de caudillo y, en su afán de permanecer, terminó convirtiendo el partido principalmente en una maquinaria de clientela política. A este segundo momento corresponde el liderazgo de Alan García, quien no encabeza una comunidad de creyentes, como en los años aurales, sino una red de clientela política que espera obtener algún beneficio, para ellos o para sus promotores, como resultado de su labor partidaria.

A la etapa del partido de clientela pertenece el gobierno aprista de los años 1985-1990. Más allá de juzgar su política gubernamental, signada por errores de dirigismo estatal y sectarismo político, es fundamental señalar lo que caracterizó la conducta de esta administración: incompetencia en la acción de gobierno y parece ser (cada vez con mayores indicios) que también grave corrupción en el manejo de la cosa pública. Incompetencia y corrupción que son consecuencia de haberse convertido en una maquinaria de satisfacción de

múltiples clientelas y que el APRA se niega hasta hoy a reconocer y evaluar en toda su magnitud.

Los argumentos expuestos nos permiten señalar, como antes lo hicimos para el populismo en general, las limitaciones del aprismo como alternativa de solución a los problemas nacionales que busque realizar las banderas de justicia y libertad mencionadas y su distancia, por lo tanto, de una opción de socialismo democrático.

6. El socialismo y la globalización de la democracia

La reflexión sobre el objetivo y los valores del socialismo democrático a comienzos del siglo XXI no puede ser de ninguna manera aquella de los fundadores del socialismo que reaccionaban frente a los horrores de la primera revolución industrial, ni menos la que desarrollaran los socialistas en el período de entreguerras, deslumbrados por la revolución bolchevique, ni tampoco la que se gestó durante el auge socialdemócrata en el Occidente europeo y el paralelo estancamiento de los "socialismos reales" en el curso de la Guerra Fría. De todas las etapas recogemos elementos permanentes y experiencias negativas, pero debemos ahora caracterizar el signo distintivo del momento en que vivimos.

Terminado el enfrentamiento bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se afirma una tendencia hacia la globalización de las relaciones humanas, tanto en la esfera de la economía con la universalización de las relaciones de mercado

y el auge económico capitalista basado en la informática y otras formas de alta tecnología, como en la esfera de la política, con la exigencia internacional por el respeto a los derechos humanos y la democracia. Es importante remarcar que este fenómeno de globalización, en la esfera económica, es diferente a los fenómenos de internacionalización del capital, ocurrido a finales del siglo XIX y de transnacionalización del mismo, ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial. En el primer caso el capital se internacionaliza manteniendo su raíz nacional; en el segundo, su presencia es transversal a los Estados nacionales; en el caso que nos ocupa se trata de la conversión del planeta en una verdadera "aldea global", donde la idea del Estado-nación entra en crisis y es cada vez más difícil distinguir fronteras efectivas entre los países.

Esta tendencia a la globalización, sin embargo, no está exenta de renovadas políticas imperiales a través de las cuales los países (o bloques de países) desarrollados buscan integrar, en sus propios términos y para su propio beneficio, a los países menos desarrollados a esta aldea global. Este renovado intento de dominación se da, al igual que los antiguos, con particular énfasis en la esfera económica, en la que los países desarrollados y sobre todo Estados Unidos, usan su control de las agencias financieras internacionales para imponer políticas que privilegian el pago de la deuda externa y la apertura indiscriminada de los mercados a las empresas multinacionales.

Pero este tipo de globalización económica entra crecientemente en contradicción con la globalización política que reclama derechos y democracia para todos. Derrotado el comunismo, la última tentación totalitaria de este siglo, ya no hay pretexto aparente para postergar el reclamo democrático de los pueblos, salvo el esfuerzo que todavía hacen algunos dictadores —con el beneplácito de muchas multinacionales— por subordinar derechos y democracia a un supuesto crecimiento económico por la vía autoritaria.

La contradicción no sólo se da en los países pobres, donde la relación entre la violación de los derechos humanos y los ajustes neoliberales es cada día más clara, sino también en los propios países desarrollados, donde sectores cada vez más importantes de la ciudadanía obligan a sus gobiernos a respetar la vigencia de los derechos humanos, tanto en sus propios países como en las partes más diversas del planeta. Esta contradicción se hace explícita cuando en el concepto de “derechos humanos” no sólo se incluye el derecho a la seguridad física de las personas, sino también los derechos económicos y sociales que tienden a ser arrasados por las políticas de ajuste que señalamos.

Hay necesidad entonces de entender la lucha por los ideales del socialismo democrático en el marco de esta lucha por la globalización de la democracia, que tiene en el plano internacional como enemigo más importante este gran intento

de integración subordinada de las economías de los países pobres a la nueva dinámica del mercado mundial. A todos los que nos hablan de globalización de relaciones de mercado a las que el Perú se debe integrar sin demora, hay que responderles señalando que la única integración fructífera al mercado mundial es aquella que se desarrolla en términos democráticos.

7. Los valores socialistas como base de una propuesta política

El objetivo supremo del socialismo es la emancipación humana de toda forma de dominación en las esferas tanto pública como privada. Este objetivo de emancipación está guiado por un conjunto de valores permanentes que son: libertad, igualdad y solidaridad. Estos son los valores que nacen como propuesta política con la revolución francesa y que inaguran la modernidad. El socialismo recoge y desarrolla estos valores modernos como fundamento de su lucha por la justicia social y el bienestar. Ellos constituyen valores inseparables e interdependientes y son los que le dan el contenido ético al movimiento socialista.

En el Perú estos valores, de distintas formas y en diferentes circunstancias, han sido banderas de los movimientos obreros, campesinos y de clases medias contra la dominación oligárquica y la explotación capitalista. En estas luchas es que el pueblo peruano le ha encontrado sentido a la libertad, la

igualdad y la solidaridad, porque ha descubierto la importancia del usufructo de sus derechos y la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes para convertirse en ciudadanos, así como la relevancia del esfuerzo conjunto para enfrentar a enemigos inmensamente más poderosos.

La definición socialista que propongo de estos valores fundamentales es la siguiente:

Libertad: es la posibilidad de ejercer individual y colectivamente los derechos que nos corresponden como seres humanos, sin coerción, tanto económica, causada por la explotación capitalista, como política, producto de la dominación estatal, que nos impida hacerlo; de cumplir con nuestros deberes como ciudadanos de una determinada comunidad, y de gozar de las condiciones para que este ejercicio de derechos y deberes sea factible. Ha distinguido al socialismo a lo largo de su historia tener una concepción no solo "negativa" de la libertad (como libertad de la coerción estatal), sino también "positiva" (como posibilidad para el desarrollo personal, el ejercicio de deberes con la comunidad y el logro de condiciones para que la libertad sea factible). En este sentido los socialistas asumen el concepto liberal de libertad negativa y lo completan en un sentido positivo, que lleva al conjunto a preocuparse por la libertad de cada individuo y viceversa.

El Perú es un país en que los derechos fundamentales de las personas han sido, en la práctica,

reconocidos para un pequeño sector de la población: aquellos pertenecientes a las clases medias y altas. Es sólo en las últimas décadas que los sectores mayoritarios, a través de vastos movimientos sociales que generaron distintos tipos de organización, consiguieron reconocimientos para sus derechos, tanto individuales como económicos, sociales y políticos. Es decir, consiguieron reconocimiento como miembros de una comunidad nacional y, por lo tanto, como ciudadanos. Sin embargo, el reconocimiento legal de los derechos no se tradujo, sino en forma muy limitada, en condiciones que permitieran ejercerlos. Hoy, incluso, con la ofensiva neoliberal, se está produciendo un recorte no sólo práctico sino también legal de estos derechos y se están, literalmente, demoliendo las iniciales condiciones que los peruanos habíamos conseguido para realizarnos como ciudadanos.

Asimismo, a la par que se reconocían derechos, no se desarrolló por parte de los ciudadanos un sentido paralelo de deberes u obligaciones. Esto se vio alimentado por el estilo político de confrontación que ha predominado en el Perú. Esta situación desarrolló en la población un sentido clientelista en la relación con el Estado, en la que la calidad de ciudadanos servía para reclamar, pero sólo eventualmente para proponer alternativas y asumir responsabilidades.

La lucha por la libertad, entonces, se ha visto seriamente afectada, en primer lugar, por la re-

sistencia de las élites a reconocer los derechos de las mayorías y, subordinadamente, por el sentido "utilitario" que muchas veces ha tenido el ejercicio de estos derechos, inhibiendo en muchos casos los deberes y las responsabilidades de los ciudadanos para con su comunidad y el país.

Igualdad: es el reconocimiento de que todos los seres humanos, más allá de su origen social o sus cualidades personales, tienen los mismos derechos y deberes; de que deben tener acceso a las mismas oportunidades, así como también tener garantizados por la comunidad la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación y recreación. La igualdad es, asimismo, una condición esencial de la ciudadanía, que permite el desarrollo de una vida política entre pares y sienta las bases para la participación y el respeto entre los distintos actores en la vida pública. Hay que diferenciar, sin embargo, entre igualdad e igualitarismo, porque este último, al pretender una igualdad total entre los individuos, que son natural y socialmente desiguales, coacta necesariamente la libertad de los mismos. La igualdad como valor socialista alude, por ello, a conseguir un conjunto de igualdades básicas y factibles entre las personas que les posibilite realizarse como tales.

El Perú es un país que, desafortunadamente, destaca en América Latina y en el mundo por sus abismales desigualdades sociales, situación que

se ha agudizado gravemente en los últimos años como producto del agotamiento populista y de la política neoliberal. Estas desigualdades son, principalmente, de cuatro tipos: de clase, raza, género y procedencia regional. Es difícil decir que una de estas formas de desigualdad predomina sobre las demás; se trata, más bien, de un entrecruzamiento de las diversas formas de dominación social en el que las desigualdades se superponen en detrimento del oprimido.

Estas desigualdades secularmente existentes se han hecho explícitas para el conjunto de la población con la multiplicación formal de la ciudadanía en las últimas décadas, cuando los individuos que supuestamente son iguales por gozar de los mismos derechos no son tratados como iguales por alguna o varias de las consideraciones señaladas. En los últimos años el discurso liberal de la "libre competencia en el mercado" ha creado expectativas en el sentido de que con la desregulación de las actividades económicas cualquiera puede competir, como productor o consumidor, en igualdad de condiciones en la esfera del mercado. Sin embargo, el carácter oligopólico de la actividad económica y la naturaleza elitista del manejo político, hacen que estas expectativas se queden en ilusiones y la supuesta esfera de igualación se convierta en un mecanismo que multiplica las desigualdades.

Si no hay un cambio drástico en esta situación de desigualdad será imposible desarrollar un régi-

men democrático estable y una verdadera “comunidad” en la esfera política.

Solidaridad: es una actitud de colaboración entre las gentes para la realización de actividades, principalmente de organización social, con el objeto de conseguir fines comunes. La solidaridad, en una realidad como la nuestra, es una actitud que alcanza mayor arraigo entre los desposeídos y permite contrarrestar la competencia entre los individuos como el componente central de la vida social promovido por el capitalismo. La solidaridad permite, especialmente, la conformación de actores colectivos para conquistar derechos y conseguir su aceptación como miembros plenos de una determinada comunidad política. La solidaridad, sin embargo, no tiene por qué contraponerse con la iniciativa individual; por el contrario, la conjunción de solidaridad e individualismo deben permitir un desarrollo más armonioso y una mayor liberación de la creatividad de los seres humanos. Asimismo, la solidaridad como actitud no tiene por qué imponerse límites clasistas, étnicos, de género o de procedencia regional. Por el contrario, es importante promover espacios comunes que impulsen la solidaridad más allá de los grupos sociales a los que pertenezca cada cual.

La solidaridad ha sido un elemento central en el Perú para la conformación de actores colectivos que lograran la ampliación de la ciudadanía en todas sus dimensiones. Los movimientos de las co-

comunidades campesinas por la recuperación de sus tierras, forjados sobre la base de una cooperación ancestral; el "clasismo" sindical de los años setenta, que se proyectó a los movimientos vecinales y regionales, las organizaciones de productores, de seguridad y de sobrevivencia en las décadas de 1980 y 1990, son todas expresiones de la colaboración solidaria entre los sectores oprimidos y mayoritarios del país.

Pero la solidaridad como valor social se ha visto afectada en los últimos años por el discurso y las políticas neoliberales que privilegian una opción individual excluyente como salida frente a la crisis y buscan debilitar la organización social. Este desafío neoliberal no ha sido contestado todavía, de manera tal que las opciones individuales más bien enriquezcan y no se contrapongan a la organización colectiva.

8. Culminar la construcción del Perú de todas las sangres

Un aspecto fundamental para proceder a la refundación democrática que debe plantear el socialismo es culminar la construcción del Perú como una nación múltiple: pluricultural y multilingüe, el Perú de "todas las sangres" del que nos hablara José María Arguedas. Culminar con este proceso de construcción nacional constituirá una piedra angular para hacer del Perú un país definitivamente viable.

En el Perú existe una discriminación étnico-social que remonta sus orígenes a la conquista española del Tawantinsuyo y establece una grieta profunda que divide a los peruanos. Esta discriminación étnico-social, sin embargo, como ya avizorara José Carlos Mariátegui, no enfrenta grupos étnicos separados y claramente diferenciados, sino, por el contrario, se imbrica con otras discriminaciones fundamentales, principalmente de clase y procedencia regional. Esta situación lleva a que el proceso de lucha por la construcción nacional peruana no haya sido principalmente un movimiento por reivindicaciones étnicas, sino más bien por demandas de contenido clasista y regional, cuyo resultado ha sido un vasto proceso de democratización de la sociedad y del Estado. Este movimiento está a la base del proceso de mestizaje, llamado también "cholificación", ocurrido en el país en la segunda mitad del siglo xx. Este movimiento ha permitido, a través de la lucha campesina, obrera, popular y provinciana, la conquista de derechos individuales, económicos, sociales y políticos y, por lo tanto, el acceso de las mayorías a la ciudadanía; es decir, a la pertenencia, al menos formal, a la comunidad nacional peruana.

Este proceso de mestizaje como integración ciudadana refuta las ideas de una imaginaria arcadia indígena supuestamente existente en nuestro país, que han sido difundidas por diversos grupos de intelectuales a lo largo del siglo xx. Estos grupos, llamados "indigenistas" o "neoindigenistas",

si bien contribuyeron en un determinado momento a la recuperación de la raíz andina de nuestro país, se han negado luego a aceptar el contenido progresivo del mestizaje y la ambición moderna de sus protagonistas comprobada en la extraordinaria creatividad con que han enfrentado el proceso de migración del campo a la ciudad y su conversión en los nuevos habitantes de la urbe.

El mestizaje o "cholificación" que se afirma con el acceso a la ciudadanía enfrenta, sin embargo, serios problemas para su realización definitiva. El obstáculo mayor está dado por la forma elitista como se ha desenvuelto la política y manejado el Estado en el Perú. Esta forma elitista encuentra una expresión extrema en el proyecto neo-liberal autoritario hoy en curso. El neoliberalismo confía a un mercado pequeño y volcado al exterior la tarea de integración nacional. Por ello se convierte en un proyecto excluyente que intenta un desarrollo y una democracia restringidos a un sector minoritario de la población, constituido de forma principal por clases tradicionalmente dominantes de ascendencia europea. Este proyecto recorta los derechos, en especial los económicos y sociales, que son componentes esenciales de la ciudadanía, y al hacerlo impide que la población mestiza mayoritaria se identifique plenamente como miembro de una comunidad democrática.

La culminación de la construcción nacional peruana, desarrollada a lo largo de todo el siglo xx

como un gran proceso democrático, implica entonces la realización plena de la ciudadanía en un proceso de mestizaje que parte de las comunidades locales y regionales, encuentra su ámbito fundamental en las grandes ciudades y disputa en el escenario nacional el carácter de la identidad nacional peruana. El socialismo debe reivindicar las necesarias características mestiza y ciudadana de esta identidad y considerar que su plasmación definitiva es un objetivo político central.

9. La reforma democrática: el camino de una transformación radical

Desarrollar valores como los señalados y construir a la vez una nación pluricultural y multilingüe en un país como el Perú, donde existen drásticas desigualdades que dan origen a diversas formas de dominación, implica necesariamente la lucha por un profundo cambio social que supone que las mayorías tomen las decisiones fundamentales en cada una de las esferas —económica, social y política— donde existen formas de dominación.

La lucha por un profundo cambio social que redima a los oprimidos por diversas formas de dominación es una señal distintiva del socialismo desde sus orígenes.

Pero sobre lo que no ha habido acuerdo en la historia del movimiento socialista es sobre los caminos a tomarse para lograr el cambio. Dos vías y dos métodos han estado en pugna por más de un

siglo: el camino democrático y reformista versus el camino violento y revolucionario. Finalmente la prueba de la práctica ha zanjado esta histórica polémica.

La revolución, en su versión marxista-leninista, que el comunismo convirtió en el método paradigmático del cambio social, se ha demostrado, con la caída de los "socialismos reales" en Europa oriental, como una forma obsoleta que no soluciona problemas sino los magnifica. El grupo de revolucionarios profesionales que "asalta" el poder, destruye las antiguas instituciones e instaura una dictadura, es incapaz, luego de satisfechas las necesidades básicas, de promover el desarrollo económico y construir una nueva institucionalidad democrática y participativa. Ninguno de los fines "revolucionarios", ni el bienestar económico ni la plena democracia, son posibles de alcanzar por este camino. Es preciso señalar, sin embargo, que desestimar la revolución en el sentido marxista-leninista del término no significa desestimar el conjunto de las revoluciones sociales que han ocurrido en los último 200 años. Por el contrario, ha habido procesos que han permitido la liquidación del "antiguo orden" feudal y/o colonial en muchos países, dando curso a un porvenir democrático

Queda entonces el otro camino, el democrático y reformista, que ha sido el método de los socialistas que persistieron en la vía política de la lucha de masas y la competencia electoral para alcanzar

sus objetivos. A estos últimos se deben las grandes conquistas sociales de los países del occidente europeo y la formulación del Estado Social como garante de estas conquistas. La violencia, por supuesto, no es excluida por el camino reformista cuando las fuerzas reaccionarias cierran los caminos democráticos y constitucionales e impiden el ejercicio de la vida pública a los ciudadanos. Esto último es lo que en la Constitución de 1979 se denomina el “derecho a la insurgencia” contra los regímenes tiránicos.

Pero la democracia no sólo es camino, método o procedimiento; es también el contenido mismo del cambio que proponemos. Por ello el eje del cambio social no es otro que el desarrollo y la profundización de la democracia, en el hogar, la escuela, el barrio, el centro de trabajo, el municipio, la región y el gobierno central. En todas las esferas de la vida social, desde la más pequeña hasta la más grande. La justicia pasa siempre por la democracia y no al revés, como creyeron los caducos poderes totalitarios. Por eso decimos que la democracia es una forma de vida social y una norma de comportamiento que guía el desarrollo de la comunidad y educa a los ciudadanos al ponerse en acción.

10. La sociedad moderna como objetivo

A pesar de lo señalado, el cuestionamiento al camino reformista persiste por no haber logrado superar en ninguna parte el sistema de explota-

ción capitalista y la "sociedad burguesa" que este genera. La pregunta hoy es; ¿se trata de "superar" la sociedad denominada tradicionalmente por el marxismo como capitalista? o, por el contrario, el objetivo pasa a ser la superación de las formas de dominación inherentes al capitalismo a través de la democratización de las diferentes esferas sociales y políticas.

La clave está en la definición de explotación. Para el marxismo clásico la relación social capitalista es una relación de explotación porque el propietario no paga al trabajador el íntegro del valor producido por este, quedándose con lo que Marx denomina la "plusvalía". Ello genera, de acuerdo con el discurso ortodoxo, una lucha de carácter "irreconciliable" entre las clases sociales (el proletariado y la burguesía) que forman parte de esa relación de producción. La solución a esa lucha irreconciliable es el reemplazo de la "dictadura burguesa", que permite la explotación por la "dictadura del proletariado", que teóricamente debería abolirla por la vía de la expropiación a los capitalistas. Sin embargo, la propiedad privada en el sector productivo se ha demostrado hasta la fecha como más eficiente que la estatal. Pero no se trata, como tendencia mundial, de una propiedad privada que ejerce sus prerrogativas en forma absoluta sino crecientemente regulada por la autoridad pública y brindando una importante participación a los trabajadores y a la comunidad en la gestión del proceso productivo. En otras palabras, de una

propiedad privada que debe crecientemente redistribuir, por diversos mecanismos, la plusvalía que obtiene en el proceso productivo. La explotación entonces ya no está exclusivamente definida por la propiedad sino también por el grado de control que se ejerce social y políticamente sobre ella. Los intereses de clase que el marxismo ortodoxo consideraba irreconciliables han podido ser conciliados en muchos países del mundo —principalmente países capitalistas desarrollados— a través de la intervención y la regulación de la economía por parte tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de los denominados Estados Sociales.

Si los intereses contrapuestos pueden ser conciliados, entonces es factible construir un Estado democrático sin necesidad de destruir la clase propietaria sino más bien asumiendo la tarea de construcción estatal como la afirmación de una comunidad política democrática conformada por ciudadanos libres e iguales.

El asunto de la superación de la sociedad capitalista es entonces un tema pasado de moda y más bien de lo que se trata es de señalar los caminos alternativos que existen en el paso de la sociedad tradicional, definida por una rígida jerarquización social basada en relaciones de servidumbre, a la sociedad moderna, caracterizada por significativos niveles de bienestar, límites claros a la desigualdad, desarrollo de la industria y el consumo, cuidado del medio ambiente y promoción sin tre-

gua de su democratización. En la actualidad hay una disputa entre dos caminos alternativos para efectuar este pasaje: el camino neoliberal y el socialista democrático. El primero va a priorizar un tránsito que se base en la inversión de los grandes monopolios, beneficie a un sector minoritario de la población, desprece los derechos fundamentales y no tenga en cuenta el medio ambiente. El segundo, en cambio, pone en el centro de sus preocupaciones al ser humano y su necesidad de desarrollo como ciudadano, buscando compatibilizar el crecimiento económico con el bienestar de la población y el uso racional y equilibrado de los recursos, en lo que se ha venido en llamar el “desarrollo sustentable”.

11. El cambio surge de la sociedad civil

Los agentes de los cambios que propugna el socialismo son, hoy como ayer, los hombres y mujeres sometidos a diversas formas de dominación económica, social, política y cultural. La modificación de las condiciones estructurales de desarrollo de la sociedad moderna ha llevado, sin embargo, a que cambie (o en todo caso se amplíe) el rango específico de estos agentes de cambio. De acuerdo con el marxismo ortodoxo, el agente de cambio por excelencia era la clase obrera. Pero la clase obrera ha sufrido tales modificaciones en su composición, número y peso específico –tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo– por las transformaciones ocurridas con el

capitalismo, que difícilmente se le puede asignar hoy (si es que alguna vez lo tuvo) el rol de "vanguardia" que le atribuían los manuales. Esto nos lleva a eliminar a los obreros de las fuerzas sociales proclives a luchar por un gran cambio, pero sí nos obliga a tomar en cuenta las transformaciones ocurridas, particularmente en nuestra propia realidad.

La crisis económica y la violencia política ocurridas en los últimos 15 años en el Perú han tenido un efecto disgregador sobre la inicial estructuración clasista ocurrida en los años sesenta y setenta. El fenómeno de la "informalidad" o trabajo por "cuenta propia" abarca hoy buena parte de la población económicamente activa y los otrora "sectores medios" han pasado a engrosar las filas populares. Asimismo, y esto quizá sea lo más importante, se han generado, a pesar de la disgregación, formas de organización social que dan cuenta de los nuevos sectores productivos, —como las asociaciones de pequeños industriales y comerciantes—, del esfuerzo de sobrevivencia, —como los comedores populares y el vaso de leche—, y del rechazo a la violencia, como las rondas, los comités de autodefensa y las asociaciones que agrupan a los desplazados. Estas organizaciones, junto con los antiguos sindicatos, forman un importante tejido social que conforma el sector más dinámico de lo que ha venido en llamarse la "sociedad civil" en el Perú. La sociedad civil, sin embargo, no es un terreno privativo de los sectores "populares", que

son los más numerosos y dinámicos. También forman parte de ella los colegios profesionales y las organizaciones empresariales, que han destacado en los últimos años —ante la crisis de otros mecanismos de intermediación— por su rol e influencia tanto social como política.

Pero ¿qué es la sociedad civil? Es la parte organizada de la sociedad, transversal a las diversas clases sociales, que, de acuerdo a su fortaleza, forma redes entre las diversas formas de asociación que contiene. Es a través de estas redes de organizaciones que los hombres y mujeres, procedentes de distintas clases, toman conciencia de la realidad en que viven y se movilizan por sus reivindicaciones. Frente al mercado, que es una esfera de desigualdad, en la que productores y consumidores concurren con poderes distintos, la sociedad civil es una esfera de igualdad donde los individuos pugnan por desarrollarse como ciudadanos, —es decir como pares—, desde sus particulares orígenes sociales. La sociedad civil se convierte así en la esfera democratizadora por excelencia donde la gente tiene la oportunidad de participar en la vida de las organizaciones sociales y donde se gestan los mecanismos de intermediación con el Estado.

En una sociedad de inicial estructuración clasista como la peruana, con el agregado de la crisis, que disgrega lo estructurado, la sociedad civil es aún bastante débil, por la poca capacidad de estabilidad y permanencia de las organizaciones

que la conforman. Sin embargo, la crisis de los últimos 15 años, ha demostrado también la vitalidad inicial de esta sociedad civil desarrollando nuevas formas organizativas, tanto gremiales como de sobrevivencia, que han permitido enfrentar la amenaza de la inviabilidad del país.

Es justamente en la sociedad civil donde andan las fuerzas del cambio en democracia. Ella es la esfera donde concurren fuerzas sociales desiguales por clase, raza, género y/o procedencia regional, para tener la oportunidad de organizarse desarrollando movimientos sociales por sus intereses particulares y reivindicaciones específicas. En este proceso organizativo es que la desigualdad original puede transformarse en igualdad ciudadana para demandar una mayor participación en las decisiones y una mejor representación política. Desde esta esfera es que, con el mayor beneficio para la sociedad en su conjunto, pueden reformarse los partidos políticos y/o crearse otros nuevos, recomponiendo los mecanismos de intermediación destruidos por la crisis. Esto significa establecer "desde abajo" nuevos canales de participación donde individuos y organizaciones agregen sus demandas e intereses particulares y los expresen políticamente para convertirlos a través de las instituciones en normas de interés general. El proceso contrario, donde caudillos o grupos de notables forman redes de clientela para reelegirse permanentemente privatizando el Estado y usufructuando de él, constituye la prác-

tica elitista, heredera del pasado oligárquico, que debemos desterrar.

El espacio privilegiado para el desarrollo de la sociedad civil se encuentra a nivel local y regional. Allí donde los individuos se conocen, donde se desarrollan organizaciones para enfrentar problemas concretos, donde es más factible la participación directa de los ciudadanos en el quehacer público; allí es donde una sociedad civil puede echar verdaderas raíces y donde se pueden gestar los elementos para una renovación profunda de la política.

12. Del Estado de clase al Estado social

¿Cuál debe ser el carácter de la transformación estatal que pretende el socialismo? Para el marxismo-leninismo se trataba de destruir el Estado de clase y reemplazarlo por una "dictadura del proletariado", lo que perennizaba al Estado como una instancia de dominación sobre el conjunto de la sociedad e incluso desarrollaba aún más sus características represivas. Para el socialismo democrático, en cambio, la tarea no es destruir el Estado sino transformarlo, promoviendo la participación ciudadana desde la sociedad civil y la ocupación de los espacios estatales por las mayorías a partir de la conquista del gobierno.

En el Perú existe la dominación política de un Estado que expresa intereses minoritarios de clases propietarias. Un Estado que, más allá de sus dimensiones, ha sido históricamente manejado

como un recurso privado de los grandes propietarios. Este orden político, luego de la crisis de la dominación oligárquica, ha buscado incesantemente reorganizarse y modernizarse sin poder cumplir su cometido. Hoy, este Estado de clase se muestra, a través del proyecto neo-liberal, en toda su desnudez privatista y excluyente. Los propietarios se sienten con más derecho que nunca a que el Estado vele por sus intereses privados, sin importarles el bienestar más elemental de las grandes mayorías.

Pero, al mismo tiempo que los grupos de poder que siempre han manejado el Estado insisten en usarlo en su beneficio, se produce también una importantísima demanda ciudadana por mayor participación y mejor representación políticas. Esta demanda se basa en la extraordinaria multiplicación ciudadana de los últimos 50 años que dobla el número de ciudadanos efectivos, es decir de votantes en relación a la población total, del 18 al 45 por ciento entre 1963 y el presente. Esta multiplicación, producto del sufragio universal existente desde 1979, hace imposible no escuchar las nuevas voces en escena. Sin embargo, su expresión democrática depende de que existan el o los partidos adecuados para canalizar las consecuencias del sufragio universal en la plasmación de un nuevo orden estatal que vele por el interés general.

Se trata entonces de transformar el Estado de clase que actualmente existe en el Perú en un

Estado Social y Democrático de Derecho que desprivatice el histórico manejo del Estado peruano y represente el interés general. El Estado Social expresa, por sobre todas las cosas, la responsabilidad pública por el bienestar de la población y las garantías para la participación y la representación democráticas del conjunto de la ciudadanía. El Estado Social, así como garantiza el derecho a la propiedad privada, garantiza también el derecho al trabajo y a la seguridad social y se encarga de ser la gran entidad redistribuidora de la riqueza, tarea esta última particularmente urgente en un país de desigualdades tan abismales como el Perú. El Estado Social se convierte así, por iniciativa de la sociedad civil, en otra de las grandes fuerzas transformadoras de la sociedad, por lo que su logro y consolidación en el mediano y largo plazo es el objetivo estratégico de poder del socialismo democrático.

Sin embargo, es muy importante insistir en la ligazón entre sociedad civil y Estado Social, porque cuando el Estado se desliga de las organizaciones de la sociedad y empieza a ser controlado por su propia burocracia, por mejor entrenada y profesional que esta sea, tiende a corromperse y a decaer en su rol de servicio a los ciudadanos.

13. Hacia una cultura política de consenso

Por las hondas desigualdades sociales que han caracterizado históricamente al Perú, nuestra cul-

tura política ha sido, principalmente, una cultura de confrontación. La exclusión de los adversarios políticos del gobierno y de las mayorías sociales del Estado fue una característica del orden oligárquico que ha influido decisivamente en los regímenes posteriores, fueran estos dictaduras militares o intentos democráticos. De igual forma, la ideología marxista-leninista que prevaleció en las dirigencias de los movimientos populares entre las décadas de 1970 y 1990, alimentó la concepción de que la lucha política pasa siempre por la eliminación del adversario. Es más, el periodo entre 1980 y 1995 ha sido un período de aguda confrontación política, primero por la guerra interna y luego por la salida autoritaria a la misma que se pretende con el golpe del 5 de abril de 1992. Lo que es peor, tantos años de aguda confrontación han producido en importantes sectores de la población reflejos autoritarios que amenazan con perdurar. La confrontación, sin embargo, no hace sino llevarnos a sucesivos entrampamientos políticos que dificultan la instauración de un régimen democrático estable.

El fin de la Guerra Fría a nivel mundial, así como las calamidades producto de la guerra interna y el golpe de Estado, nos llevan a reivindicar el consenso para construir la democracia. Pero no se trata de una simple invocación o de un valor en abstracto. Cuando hablamos de consenso nos referimos a la necesidad de una nueva actitud po-

lítica en la relación entre las fuerzas que aspiran a construir un futuro democrático para el Perú. Esta nueva actitud debe basarse en un consenso fundacional respecto de las características que debe tener el régimen político. Por ello desde el socialismo democrático debemos proponer un Acuerdo Constitucional entre las diversas fuerzas políticas que consagre los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo los derechos individuales, económicos, sociales y políticos; el respeto al derecho a la propiedad privada y los límites al mismo que señala el interés público; el equilibrio entre los poderes del Estado y la descentralización económica y política; el señalamiento de los partidos políticos como las organizaciones fundamentales de mediación entre la sociedad y el Estado; un régimen de economía social de mercado y una planificación concertada entre los agentes económicos, y la subordinación de los militares al poder civil.

Este Acuerdo Constitucional debe ser el eje del régimen político, aceptado por todas las fuerzas que participen del mismo. A partir de este acuerdo, que fija las reglas de juego de la democracia, será posible establecer las agendas para la solución de los problemas específicos en los diversos ámbitos de la vida peruana. Los socialistas debemos contribuir a la plasmación de un acuerdo de este tipo, desde nuestros propios lineamientos programáticos, pero con un amplio sentido histórico de construcción nacional.

14. Los grandes lineamientos programáticos del socialismo democrático

Los lineamientos programáticos son un conjunto de metas estratégicas que los socialistas democráticos nos planteamos a alcanzar en el mediano y largo plazo y que guían la elaboración de programas, planes de acción y planes de gobierno en cada nivel y en cada momento político.

Estos lineamientos tienen como objetivo el mismo que nuestro movimiento: la emancipación humana de toda forma de dominación de clase, raza, género y procedencia regional. El eje de su planteamiento es la democracia. Se trata de promover, sobre todo, la democratización de la sociedad civil, lo que significa democratizar las relaciones sociales a nivel de familia, barrio, escuela, centro de trabajo y de hacerlo promoviendo la organización de la población para que luche contra las desigualdades. Esta democratización, para ser tal, debe impulsar el desarrollo de una identidad nacional mestiza a través del acceso de los individuos a sus derechos fundamentales. Se trata, asimismo, de transformar el Estado, convirtiéndolo, a partir de la fuerza de los sectores organizados de la sociedad civil, de un Estado de clase en un Estado Social es decir, de ser un aparato al servicio de un pequeño grupo a ser un aparato al servicio de la sociedad. Se busca también el control social de la economía de mercado a través de la planificación concertada, la regulación pública y el control de las organizacio-

nes sociales. Se asume que esta democratización tiene como pilar fundamental la descentralización del país, debiendo el poder central repartir tanto recursos económicos como poder político. Se señala, igualmente, que para realizar esta democratización es indispensable que culmine el proceso de pacificación y se enfrenten los problemas derivados de la guerra. Por último, se considera que la democracia es un pre requisito para la integración del país al proceso de globalización en condiciones ventajosas para nuestro desarrollo tanto económico como político.

La democratización social. Es la gran meta a alcanzar en la esfera de la sociedad civil a través de la participación de los ciudadanos en la vida de sus comunidades. Consiste principalmente en la superación de las grandes desigualdades de clase, raza, género y procedencia regional. Esta democratización es una tarea de los individuos y movimientos sociales organizados que luchan por sus derechos individuales y colectivos y a la vez asumen sus deberes como miembros de la sociedad. El proceso de democratización debe producir un ciudadano activo y consciente de sus derechos y deberes, no sólo en el plano político electoral, sino también en los planos individual, económico y social.

La construcción de un Perú pluricultural y multilingüe. Significa la culminación del proceso de mestizaje, que tiene su impulso principal en el

ejercicio de los derechos fundamentales y en el desarrollo de la ciudadanía. La culminación de este proceso implica la realización de una identidad nacional peruana que asuma nuestra raíz andina y nuestra diversidad cultural y sea la base para el desarrollo sostenido en el largo plazo. El logro de esta identidad mestiza nos permitirá un contacto fecundo con la cultura universal. Esta es una cuestión de particular urgencia por el proceso de globalización en marcha.

El Estado Social y democrático de derecho.

Es la expresión de poder estatal de la democratización social y el lugar privilegiado de realización política del ciudadano activo. Debe configurar un sistema político y de partidos plural y abierto cuyo objetivo sea contribuir a la construcción de un orden y una vida socialdemocráticos, así como garantizar el bienestar de la población.

La economía social de mercado. Significa reconocer al mercado el rol de principal asignador de recursos en la esfera económica y señalar la necesidad del respeto y la promoción de las diversas formas de propiedad: privada, pública y cooperativa. Este reconocimiento va de la mano con la necesidad de establecer la planificación concertada entre los diferentes actores económicos, las necesarias regulaciones de la actividad privada, así como las posibilidades de intervención del Estado en la actividad económica para promover la justicia social y velar por el interés general.

La descentralización política y económica.

Señala la necesidad de constituir un Estado descentralizado donde el poder se estructura de abajo hacia arriba; es decir, desde los municipios y los gobiernos regionales hasta el gobierno central. Esto implica la necesidad de que municipios y regiones sean autónomos económica y políticamente, tomando sus propias decisiones, en los marcos de la Constitución y las leyes, respecto de sus propios problemas.

La pacificación nacional. Implica culminar con la desactivación de los grupos terroristas y enfrentar las graves consecuencias de los años de guerra interna. En particular, hay necesidad de establecer una firme política estatal de respeto a los derechos humanos, proceder a la redefinición del rol de las fuerzas de seguridad de manera tal que se subordinen al poder civil y colaboren en las tareas del desarrollo. Asimismo, es indispensable una política de largo plazo para atender las urgencias de la población directamente afectada por la guerra.

La globalización de la democracia. Significa promover la integración de los países en desarrollo en el proceso de globalización actual en términos democráticos. El punto de partida es la democratización interna de cada país, que se debe proyectar en la democratización de las relaciones entre los Estados, en el poder cada vez mayor de los organismos internacionales, como la OEA o la ONU, y en

el respeto a las normas respectivas en términos de derechos y democracia. Esta globalización de la democracia es la que debe permitir negociar una integración al mercado mundial en términos más favorables para el desarrollo de los países atrasados.

En esta época de globalización es fundamental promover la unidad con nuestros vecinos y los demás países latinoamericanos. Esta unidad debe tener como objetivos unir nuestros mercados para enfrentar la competencia de los países desarrollados y promover la democracia en nuestros países y en el resto del mundo.